



Universidad de
San Andrés

Universidad de San Andrés
Departamento de Economía
Licenciatura en Economía

**EL CONFLICTO ARMADO Y LA PERSISTENCIA DE LA
DESIGUALDAD EN LA DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS EN
COLOMBIA**

Natalia Garcia-Peña Bersh
Legajo: 21264
Mentor: Walter Sosa Escudero
15 de agosto de 2015
Buenos Aires, Argentina

Abstract:

Este trabajo busca explorar las repercusiones que ha tenido el conflicto armado sobre la desigualdad de ingresos en Colombia. Debido a que no existe ningún trabajo que ha tratado explícitamente este tema, se busca analizar distintos mecanismos a través de los cuales dinámicas generadas por el conflicto colombiano pueden explicar el alto nivel y persistencia de la disparidad de ingresos en este país. Entre estos, los principales mecanismos se pueden entender a partir del impacto del conflicto armado sobre la salida del mercado de firmas rurales, los efectos que tiene el conflicto sobre los retornos esperados generados por la creciente brecha educativa y dinámicas del mercado laboral relativas al desplazamiento forzoso. De esta manera, se hará un survey de trabajos relacionados que presentan herramientas de análisis empírico y conceptual como marco para desentrañar aquellos mecanismos propios de las secuelas que ha dejado el conflicto armado sobre la desigualdad de ingresos.

En segunda instancia, se lleva a cabo un análisis empírico que busca brindar evidencia consistente con los mecanismos cualitativos discutidos. Utilizando datos de panel, en una estimación por efectos fijos, se analiza cuáles de los distintos indicadores del conflicto armado son de mayor relevancia para entender las dinámicas de la distribución del ingreso en Colombia. Se encuentra que el papel del conflicto entre el Estado y la guerrilla es especialmente peyorativa en términos distributivos. Además, de manera preliminar, se presenta una primera aproximación a la utilización de variables instrumentales como base para futuros estudios que busquen profundizar el efecto causal que tiene el conflicto sobre la desigualdad. Debido a que no se ha estudiado la relación entre estas dos variables de manera empírica, este componente puede ofrecer un cimiento para futuros estudios sobre este tema.

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN	3
LA ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN	9
1. CONTEXTO HISTÓRICO	11
2. SURVEY DE INVESTIGACIONES SOBRE DESIGUALDAD Y CONFLICTO	15
2.1. DETERMINANTES DE LA DESIGUALDAD	17
2.2. LAS REPERCUSIONES NEGATIVAS DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA	18
3. MARCO TEÓRICO	20
4. EL CONFLICTO ARMADO Y LA DESIGUALDAD	25
4.1. EL EFECTO DISTRIBUTIVO DE LA SALIDA DE FIRMAS RURALES	27
4.2. EFECTO DE LA VIOLENCIA SOBRE LA DISTRIBUCIÓN EDUCATIVA	28
4.3. EFECTO DE LA VIOLENCIA SOBRE EL MERCADO LABORAL	30
4.3.1. LO URBANO: BRECHA Y MERCADO LABORAL	30
4.3.2. LO RURAL: EL CAMPESINADO Y EL NARCOTRÁFICO	34
5. METODOLOGÍA EMPÍRICA	38
5.1. FUENTES DE BASES DE DATOS	39
5.2. ANÁLISIS ECONÓMETRICO	43
5.3. ANÁLISIS PRELIMINAR SOBRE LA UTILIZACIÓN DE VARIABLES INSTRUMENTALES	45
CONCLUSIÓN	48
ANEXO	52
BIBLIOGRAFÍA	53

Las dinámicas generadas por el conflicto armado en Colombia sobre distintos fenómenos sociales no sólo presentan un tema interesante de analizar desde un punto de vista académico, sino que se considera de gran relevancia para el contexto político actual. A partir septiembre del 2012, el Gobierno Nacional ha estado en un proceso de negociación con la guerrilla de Las FARC, en el que delimita la discusión a una agenda de cinco puntos de negociación: 1) La política de desarrollo agrario integral, 2) el desmantelamiento del uso del narcotráfico como fuente de financiación de las FARC, 3) La restitución de garantías y resarcimiento a las víctimas del conflicto, 4) La participación política y las pautas de inserción de las FARC al sistema de partidos, 5) El fin del conflicto, definido como la entrega de las armas por parte del grupo subversivo, supeditada a una posible exención o disminución de penas privativas de la libertad o sanciones alternativas por un Marco Jurídico para la Paz (Presidencia de la Nación 2012). En agosto del 2015, los primero tres puntos de la agenda se habían acordado, pero aún se discutían los últimos dos, que son aquellos que generan mayor polémica. Debido a la adhesión constitucional al Estatuto de Roma, que obliga al Estado colombiano a tomar acciones judiciales en contra de los actores que cometen delitos de lesa humanidad, se genera una oposición de las FARC frente a cumplir condenas que no consideran proporcionales. Estos temas han sido fuertemente contenidos por la opinión pública, generando cuestionamientos acerca de la factibilidad del éxito de las negociaciones, y un aumento en las expectativas sobre su fracaso y el regreso a la violencia (El Tiempo 2015).

De esta manera, se torna políticamente relevante estudiar las consecuencias socio-económicas que puede tener la perpetuación de la violencia, en caso de que se desplomen las negociaciones actuales, y se retorne a una situación de violencia. Uno de los temas socialmente relevantes es cómo esta situación afectaría la desigualdad de ingresos. Tanto el tema de negociación acerca de el desarrollo agrario integral, que implicaría un cambio en la distribución de tierras, como la reparación de las víctimas del conflicto, pueden generar efectos positivos en términos redistributivos. No obstante, como se estudiará en este trabajo, un retorno a la guerra puede tener efectos gravemente perjudiciales para la

distribución del ingreso. De esta manera, profundizar este fenómeno puede generar insumos para la ponderación política de las opciones que conllevaría el cese de la negociación con las FARC.

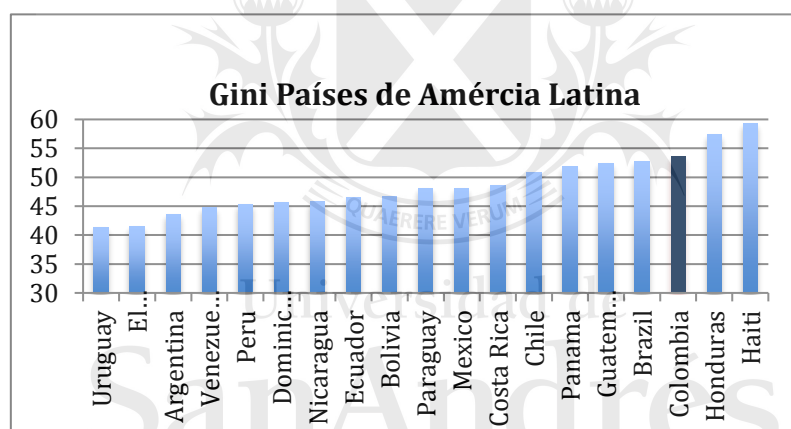
Tomando en cuenta la relevancia de este tema para el contexto político actual, se torna necesario entender cuál es la particularidad del nivel y la tendencia de la brecha salarial colombiana como disparador de la investigación, y para posteriormente entender el papel del conflicto en este fenómeno. Así, la desigualdad en la distribución del ingreso en Colombia presenta características excepcionalmente altas tanto a nivel mundial como a nivel latinoamericano. Entre estas características, se destaca los altos niveles de desigualdad, así como la divergencia en la tendencia de este país frente a sus contrapartes latinoamericanas.

Este trabajo busca explorar las repercusiones que ha tenido el conflicto armado sobre la desigualdad de ingresos en Colombia. Debido a que no existe ningún trabajo que ha tratado explícitamente este tema, se busca analizar distintos mecanismos a través de los cuales dinámicas generadas por el conflicto colombiano pueden explicar el alto nivel y persistencia de la disparidad de ingresos en este país. Entre estos, los principales mecanismos se pueden entender a partir del impacto del conflicto armado sobre la salida del mercado de firmas rurales tanto en implicancias sobre la concentración de ingresos como en los aumentos en las disparidades que genera sobre el mercado laboral, en los efectos que genera el conflicto sobre los retornos esperados debido a un aumento en la brecha educativa, y en dinámicas del mercado laboral generadas por el desplazamiento forzoso. De esta manera, se hará un survey de trabajos relacionados que presentan herramientas de análisis empírico y conceptual como marco para desentrañar aquellos mecanismos propios de las secuelas que ha dejado el conflicto armado sobre la desigualdad de ingresos.

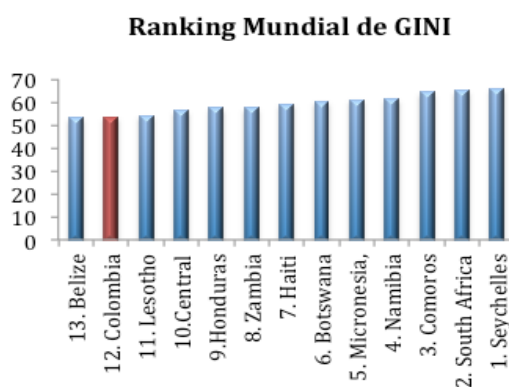
En segunda instancia, se lleva a cabo un análisis empírico que busca brindar evidencia consistente con los mecanismos cualitativos discutidos. Utilizando datos de panel, en una estimación por efectos fijos, se analiza cuáles de los distintos indicadores del conflicto armado son de mayor relevancia para entender las dinámicas de la distribución del ingreso en Colombia. Se encuentra que el papel del conflicto entre el Estado y la guerrilla es especialmente peyorativa en términos

distributivos. Además, de manera preliminar, se presenta una primera aproximación a la utilización de variables instrumentales como base para futuros estudios que busquen profundizar el efecto causal que tiene el conflicto sobre la desigualdad. Debido a que no se ha estudiado la relación entre estas dos variables de manera empírica, este componente puede ofrecer un cimiento para futuros estudios sobre este tema.

Entre las características excepcionales en términos de distribución, Colombia es el duodécimo país más desigual del mundo, con un índice GINI de 53.53. En América Latina, sólo Honduras y Haití tienen mayores desigualdades en la distribución de ingreso y es el segundo país más desigual dentro del grupo CIVTETS de economías emergentes¹. actualmente está iniciando un proceso de entrada a la OCDE, cuyos miembros tienen en promedio un índice GINI de 30.7 (Moller 2012), muy por debajo de los niveles colombianos.



Elaboración Propia: Poverty and Inequality Database.World Bank(2015)

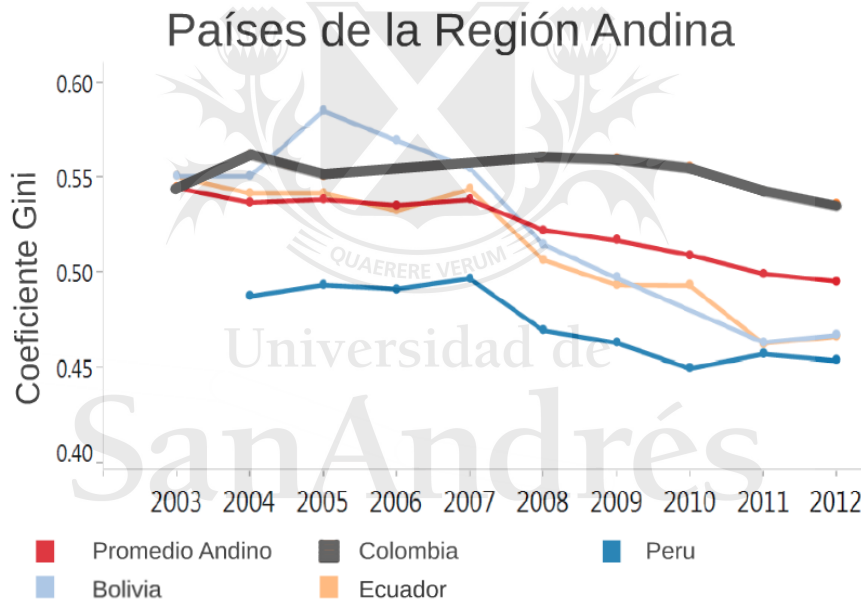
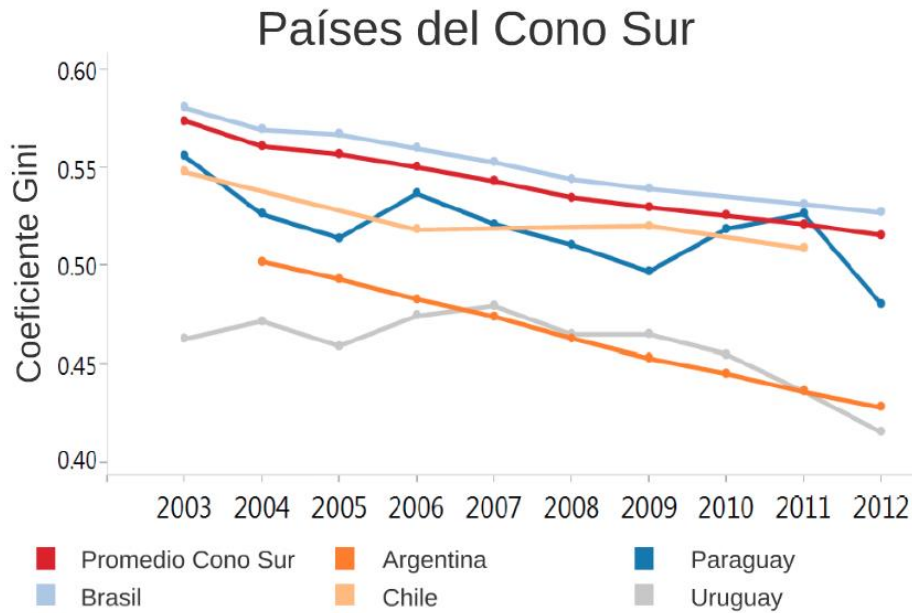


Elaboración Propia: Poverty and Inequality Database.World Bank(2015)

¹ CIVETS se refiere a los mercados emergentes de Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto Turquía y Sudáfrica.

La prevalencia de América Latina como un continente desigual es un tema ampliamente estudiado en la literatura sobre distribución de ingresos. Toda una rama de literatura se desprende de los orígenes de dicha desigualdad, enfocándose en la importancia que tuvieron las instituciones coloniales en definir la distribución de tierra y su posterior dependencia de la trayectoria en la formación de situaciones latinoamericanas actuales (Acemoglu, Johnson and Robinson 2001). Esta literatura enfatiza el carácter estructural de la distribución de ingresos, y los factores que llevan a que dicha distribución resulte relativamente constante a lo largo de extensos periodos de tiempo. A partir de estos estudios, parecería difícil pensar en instrumentos de política que puedan fácilmente alterar la trayectoria institucional que envuelve a las economías latinoamericanas.

No obstante, a partir del 2000, varios países latinoamericanos manifestaron disminuciones significativas y persistentes en sus niveles de desigualdad, especialmente durante los primeros diez años del milenio (Gasparini et al. 2008; Lustig y Lopez-Calva 2010; World Bank 2011; Lustig, Lopez-Calva y Ortiz-Juarez, 2013). Algunas de las explicaciones de dicha disminución incluyeron mejoras en el diferencial salarial entre trabajadores calificados y no calificados, relacionado con un aumento en acceso a educación y consecuentemente un aumento en la oferta de trabajadores calificados (Gasparini et al. 2011). Además se destaca el impacto de transferencias monetarias condicionales y un mejoramiento en el enfoque de estos programas a la población más vulnerable (Lustig y Lopez-Calva 2010), así como el crecimiento económico que muchos países vivieron debido a una balanza comercial favorable. La evidencia más reciente resalta un estancamiento en las tendencias de desigualdad a partir del 2010 en la región. Esto se atribuye a repercusiones negativas que recibió la región de la crisis del 2008, así como la vulnerabilidad de los mercados laborales ante shocks negativos (Cord, et al. 2014).



Fuente: Banco Mundial. (Cord, et al. 2014)

Pese a esta marcada tendencia a nivel regional, la distribución del ingreso en Colombia no compartió dichas características. Más bien, el índice GINI colombiano mantuvo un nivel en mayor parte más alto que el resto de los países, y no mostró una tendencia decreciente significativa. En la reciente literatura especializada, se ha procurado entender dicho estancamiento a partir de políticas educativas inadecuadas que a su vez no lograron disminuir el diferencial salarial entre trabajadores calificados y no calificados (Azevedo, Inchauste and Sanfelice

2012), incompatibles canales y cantidades de recursos destinados a redistribución (Goñi and Lopez 2011), impactos limitados de los programas de asistencia social como transferencias monetarias condicionales (Rawlings and Rubio 2005) y un sistema impositivo regresivo y segmentado (Moller 2012) entre otras explicaciones.

La singularidad del caso colombiano tanto en nivel como en tendencia, llevan a pensar que existen características distintivas de esta economía que divergen de los otros casos latinoamericanos y que podrían contribuir a entender esta singularidad. Este trabajo busca contribuir al enriquecimiento de esta literatura a partir de un rasgo que distingue tajantemente a Colombia de otros países latinoamericanos: el conflicto armado. Se busca explorar cómo la excepcionalidad de la violencia en Colombia posee características que pueden explicar la persistencia de la desigualdad en la distribución del ingreso en Colombia.



La estructura de la Investigación

El trabajo está organizado en seis segmentos. La primera sección provee una síntesis del contexto social y político del surgimiento del conflicto armado, así como los grandes hitos en el desarrollo del conflicto, para brindar un entendimiento histórico acerca de los orígenes y procesos evolutivos de la violencia en el caso colombiano.

La segunda sección presenta un survey de las investigaciones relacionadas a temas de desigualdad y del conflicto. Específicamente, se destacan estudios de micro descomposición que buscan entender las causas de la desigualdad, aunque proveen resultados más descriptivos que interpretativos. No obstante, las descripciones de los mercados laborales y características del sistema educativo muestran canales plausibles de propagación del efecto distributivo del conflicto. Por otro lado, se resaltan otro tipo de investigaciones que buscan explicar las consecuencias sociales y económicas que genera el conflicto armado en Colombia. Aunque estos trabajos no estudien explícitamente los efectos distributivos del conflicto armado, sí proveen evidencia del papel que tiene la violencia en explicar ciertos fenómenos perjudiciales para el bienestar social. El entendimiento de estos canales específicos proveen herramientas empíricas importantes para entender el efecto de la violencia sobre la desigualdad. La tercera sección presenta una discusión teórica acerca de los posibles marcos conceptuales para explicar la brecha salarial, y la relevancia de estas teorías para el caso colombiano.

La cuarta sección explica cómo el conflicto armado afecta a la desigualdad en la distribución de ingresos. Las ramificaciones que ha tenido el conflicto armado sobre la brecha de salarial se pueden subdividir principalmente en tres procesos disímiles pero interrelacionados: la salida de firmas rurales del mercado, el aumento de la brecha educativa, y el papel del desplazamiento y otros cambios rurales en explicar variaciones en el mercado laboral.

La quinta sección provee evidencia empírica consistente con el efecto perjudicial de la violencia sobre la desigualdad, medida como Índice GINI. En esta sección se utiliza una estimación por efectos fijos para examinar cuáles son los indicadores de violencia más pertinentes a tomar en cuenta para analizar las consecuencias distributivas. Además, proporciona un análisis preliminar de la discusión econométrica sobre problemas de endogeneidad y la posibilidad de

utilizar una estimación de variables instrumentales en futuras investigaciones, al proveer un instrumento relevante en el futuro análisis causal.

La sexta sección provee un análisis de los distintos mecanismos analizados cualitativamente, y su vínculo con los hallazgos empíricos estimados por efectos fijos. Tomando en cuenta este efecto conjunto, se provee algunos disparadores a tomar en cuenta para el contexto político actual de las negociaciones entre el gobierno y las FARC.



Universidad de
San Andrés

1. Contexto Histórico

Dos conflictos marcaron la historia de Colombia en el siglo XX. El primero inició en 1948 con el asesinato del candidato presidencial, Jorge Eliecer Gaitán, un líder popular dentro de sectores sociales trabajadores y campesinos pequeños. Su muerte desembocó una reacción social contundente, en el que hubo saqueos y violencia en Bogotá. Este evento se conoció como el *Bogotazo* y marcó el comienzo de un periodo de enfrentamiento conocido como *La Violencia*. Durante este periodo miembros de los dos principales partidos políticos, el Liberal y el Conservador, se enfrentaron de manera violenta a través de todo el territorio. Los miembros de ambos partidos contrataban milicias armadas que dejaron 200.000 muertos en el periodo entre 1948 y 1953 (Guzman and Fals-Borda 1963). Para terminar con el enfrentamiento bipartidista, ambos partidos acordaron compartir el poder en un pacto llamado *El Frente Nacional*. Éste consistía en alternarse la presidencia cada cuatro años entre Liberales y Conservadores.

Aunque este acuerdo contribuyó a reducir la violencia bipartidista, la persistencia de factores estructurales como la desigualdad de ingresos, la debilidad institucional y las disputas de tierras, así como la marginalización de las milicias previamente mencionadas, propulsaron el conflicto a una nueva etapa. Además, aunque *El Frente Nacional* tuvo repercusiones positivas sobre la estabilidad del régimen político y cooperación política partidaria, no generó espacios participativos para otros grupos sociales distintos a las dos ideologías tradicionales. Esto contribuyó a que muchas de las disputas y demandas sociales se canalizaran por conductos no institucionales. Así, a finales de 1964 se llevó a cabo la Primera Conferencia Guerrillera, y en la Segunda Conferencia de 1965 se consolidó formalmente el grupo denominado Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia o FARC (Pataquiva 2009). Por otro lado, el Ejército de Liberación nacional, otro grupo guerrillero, se creó en 1962, inspirados en la revolución cubana. Después de las elecciones electorales de 1970, hubo diversos reclamos de fraudes en las elecciones. Incentivados por esta tensión se creó un tercer grupo guerrillero denominado el movimiento M-19.

A diferencia de los orígenes de los grupos guerrilleros, el nacimiento de los paramilitares es menos claro. Es bien conocido que este grupo inició sus

actividades con el propósito de combatir a las guerrillas y defender a los grandes latifundistas de usurpaciones de tierra por parte de estos grupos. El MAS (Muerte a Secuestradores) se considera por algunos como el primer grupo paramilitar. Se creó como respuesta al robo de ganado, a los cobros extorsivos de las guerrillas y el aumento de secuestros a ganaderos, terratenientes y narcotraficantes. Hay una discusión en la literatura acerca de las fechas y orígenes específicos de estos grupos, puesto que algunos autores reclaman que fueron creados posterior a las negociaciones entre la guerrilla y el Estado en 1986, mientras que otros trazan sus orígenes a ejércitos privados de terratenientes durante los años cincuenta (Arias, et al. 2014). Aunque inicialmente se dedicaban mayormente al narcotráfico y a la defensiva, con el tiempo pasaron a la ofensiva y se consolidaron bajo un mismo mando en 1997, con el nombre de Autodefensas Unidas de Colombia o AUC.

Aunque los grupos ilegales se financian a partir de secuestros, extorsiones, el pago de vacunas y la minería ilegal, su principal fuente de financiación es el narcotráfico. Especialmente posterior a 1994, cuando Fujimori logró purgar en gran parte a Perú de su involucramiento en los carteles de drogas, el negocio del narcotráfico se desplazó a Colombia que anteriormente había participado en mayor parte como productor de la planta de coca. Después de este año, pasó a llevar a cabo el refinamiento y exportación de cocaína. Simultáneamente, el gobierno colombiano desmontó las cabezas de los carteles de Medellín y de Cali, que en ese entonces eran los principales actores en el negocio de la droga, proceso que se concretó con la muerte de Pablo Escobar en 1993. Hay varios estudios que encuentran una relación causal estadísticamente significativa entre el aumento del narcotráfico y el aumento de violencia debido al fortalecimiento de grupos ilegales (Angrist and Kruger 2008) (Mejía and Restrepo 2011). Debido a la conexión endógena del narcotráfico y la violencia proveniente de la determinación simultánea entre estas variables, Angrist y Kruger (2008) utilizan un shock exógeno sobre la producción de cocaína para desentrañar el efecto que genera el narcotráfico sobre la violencia. Así, en 1993, el gobierno de Fujimori en Perú ejecutó un desmantelamiento masivo de laboratorios de elaboración de cocaína. Según los autores, esto generó una externalidad que transformó del mercado de drogas colombiano. Antes de 1993, Colombia se insertaba en el mercado de narcóticos como productor de hojas de coca, la materia prima en la producción de

esta droga. En contraste, posterior a las acciones de Fujimori, los laboratorios de transformación y elaboración del producto final se trasladaron a Colombia. De esta manera, los grupos al margen de la ley heredaron los últimos eslabones de producción que generaban un mayor valor agregado que la producción de hojas de coca. Angrist y Kruger utilizan este incremento exógeno en los ingresos provenientes del narcotráfico para establecer el nexo causal entre el narcotráfico y la violencia en Colombia.

Con el aumento del narcotráfico y la violencia, en 1999 se lanzó una iniciativa conjunta entre el gobierno colombiano y el gobierno estadounidense conocida como el “Plan Colombia” que tenía como principal objetivo la disminución del narcotráfico y la recuperación de las tierras en posesión de grupos guerrilleros. No hay un consenso claro sobre las repercusiones de dicho programa, aunque varios estudios demuestran que no fue una política muy efectiva en la lucha contra el narcotráfico, aunque su desempeño mejoró significativamente cuando en el 2008 se cambió el enfoque del programa, de la erradicación de la planta de coca hacia eslabones de la cadena que generaban mayor valor agregado a la producción de cocaína (Arias and Ibañez 2014).

A partir del 2002, bajo la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, se inició la “Política de Seguridad Democrática” que consistía en una gran ofensiva militar contra los grupos guerrilleros. Los objetivos principales de este proyecto eran disminuir la capacidad militar de estos grupos, aumentar la presencia militar del Estado colombiano, aumentar los indicadores de seguridad nacional y recuperar tierras previamente tomadas por estos grupos. Aunque sí logró bajar los indicadores agregados de violencia, y debilitar militarmente a las FARC, hubo fuertes críticas frente a manejos militares del Estado, como el fenómeno de los “falsos positivos”. Este consistía en el asesinato de civiles por parte del Ejército Nacional para hacerlos pasar por guerrilleros como modo de aumentar las estadísticas del número de guerrilleros muertos en combate (Arias, et al. 2014).

A finales del 2012, el gobierno de Juan Manuel Santos inició la negociación de un proceso de paz con las FARC en La Habana. Este proceso de negociación se distingue de procesos anteriores ya que la guerrilla se encuentra militarmente debilitada frente a ocasiones previas y la agenda de negociación está limitada a cinco puntos concretos: la política del desarrollo agrario, la participación política

del grupo ilegal, las condiciones para finalizar el fin del conflicto armado, el narcotráfico, y las víctimas (Arias, et al. 2014). Aunque en agosto del 2015 se había llegado a un consenso frente a los primeros tres puntos de la agenda, en los últimos meses ha sido más tedioso llegar a acuerdos frente a los otros dos temas, en parte por la gran oposición de la opinión pública frente a la despenalización de los crímenes cometidos, así como la dificultad de establecer un creíble cese al fuego. Aunque las FARC acordaron suspender toda actividad bélica en diciembre del 2014, rompieron dicho acuerdo en abril del 2015. A partir de entonces, hasta agosto del 2015, ha habido un escalamiento bélico del conflicto tanto por parte de las FARC como del gobierno nacional. Sin embargo, los diálogos en La Habana continúan.



2. Survey de investigaciones sobre desigualdad y conflicto

Del conocimiento estudiado, no existe ningún trabajo que explique directamente el impacto del conflicto armado sobre la desigualdad en Colombia. Hay dos estudios que se asemejan en su tratamiento del tema. Uno busca estudiar el impacto que tienen los crímenes relacionados con el narcotráfico sobre la distribución de los ingresos para el caso de México. (Azejnman, Galiani and Seira 2014). Los autores encuentran que este tipo de homicidios disminuyen el precio de las casas, especialmente de los hogares más pobres, aumentando la disparidad en la distribución de ingreso. Di Tella et al (2010), también encuentran que la violencia impacta más a la población más vulnerable en el caso argentino, puesto que ésta no cuenta con la posibilidad de protección y seguridad que los grupos más adinerados sí cuentan (Di Tella, Galiani and Sharckrovsky 2010). Por último, hay un estudio a nivel de países, utilizando datos de panel que estudia el impacto de la guerra sobre la desigualdad (Brican, Bruck and Vothknecht 2010). Encuentran que la guerra sí aumenta la desigualdad, y ésta se ve impactada especialmente en los cinco años posteriores a la finalización de la guerra, pero que después esta tendencia declina. Entre los principales mecanismos que mencionan los autores, se destaca que una de las características principales de los países en que surgen conflictos bélicos es la escasez relativa de capital físico y humano. Esto implica que la violencia impactará en mayor medida al trabajo no calificado que al capital. También destacan que la guerra puede destruir rutas de acceso que perjudican la participación de ciertos grupos en actividades económicas o exportación. Otro estudio hace un análisis cualitativo de algunos factores de violencia que puede tener implicancias distributivas, pero es un estudio publicado hace dieciocho años (Rubio 1997).

No obstante la corta literatura relacionada directamente a este tema, este trabajo sí se inserta en medio de dos ramas de investigación distintas y ampliamente desarrolladas. Una primera aproximación al estudio de la desigualdad se ha enfocado en explicar las distintas causas de la desigualdad a partir de características de toda la distribución de ingresos. Así, se enfocan las características de todos los individuos en la población para intentar entender los motivos que explican dicha distribución de ingresos en particular. En segundo

lugar, hay estudios que se enfocan en los costos sociales del conflicto armado. Estos trabajos buscan entender las consecuencias que puede tener la violencia sobre distintas variables económicas y sociales y sirven como base para entender las consecuencias distributivas que dichas consecuencias pueden tener.

El trabajo disparador que inició el estudio de la desigualdad de ingresos fue el trabajo de Kuznets (1955). Este buscaba examinar cómo cambia la desigualdad en la distribución del ingreso de un país, a medida que el país se desarrolla, o crece económicamente. Utiliza casos de países particulares para analizar el desarrollo en el tiempo de su crecimiento, y las tendencias de desigualdad. Aunque el trabajo en sí no demuestra conclusiones robustas, muchos autores posteriores aluden a este trabajo por su hallazgo que sugiere que existe una relación de U invertida entre el crecimiento y la desigualdad. Esto implicaría que a medida que los países se desarrollan, inicialmente crece su nivel de desigualdad, pero después de cierto nivel de desarrollo, la desigualdad vuelve a disminuir (Kuznets 1955).

Para el caso colombiano, hay evidencia contradictoria frente a este tema. Londoño (1994) encontró evidencia de la U invertida de Kuznets al analizar el desarrollo y desigualdad en Colombia en un estudio longitudinal. Así el autor analiza el periodo comprendido entre 1938 y 1988 y encuentra un máximo en la desigualdad en los hogares en los sesenta con un índice GINI de 56 (Londoño 1995). Sin embargo, la evidencia más reciente pone en tela de juicio este hallazgo, puesto que durante los años noventa la desigualdad ha aumentado a nivel nacional y como se expuso anteriormente, se ha mantenido a niveles altos durante la primera década del milenio. Bonilla encuentra una relación de u al examinar las diferencias regionales de la desigualdad en Colombia de manera cross section. Así, contrario a un razonamiento de Kuznets, los departamentos con mayores y menores ingresos comparten niveles de desigualdad en el ingreso altos, mientras que los departamentos con ingresos intermedios tienen menores niveles de desigualdad (Bonilla 2011). Aunque en principio esta medición corresponde más a una característica descriptiva, su naturaleza peculiar frente a la literatura general sí genera interrogantes frente al proceso particular que caracteriza a Colombia.

2.1. Determinantes de la desigualdad

La literatura reciente que estudia las distintas fuentes de desigualdad en gran parte utilizan métodos de micro descomposición como modo de estudiar los distintos componentes y su peso en las explicación de desigualdad. Esta rama de literatura tiene la característica de estudiar toda la distribución del ingreso y no sólo los promedios regionales de indicadores de desigualdad. Esto se debe a que los indicadores son medidas que resumen la disparidad de los ingresos de toda una población, perdiéndose de las características de toda la distribución. Así, se descompone a partir de distintos grupos, por distintas fuentes de ingresos laborales, o grupos educativos. En su libro *The Microeconomics of Income Distribution Dynamics in East Asia and Latin America* Bourguignon utiliza dicha técnica de descomposición de microdatos como marco para distintos estudios a nivel de país de otros autores (Bourguignon, Ferreira and Lustig 2005).

Para el caso colombiano, investigaciones sobre desigualdad son variadas y tienen aproximaciones metodológicas diversas. Han encontrado que la falta de protección social proveniente del crecimiento en el desarrollo de capital humano, así como fallas en la institucionalidad territorial, e infraestructura son factores determinantes de la desigualdad en Colombia (Lopez and Nuñez 2007). Otros utilizaron técnicas de econometría espacial para identificar la persistencia temporal y regional de la desigualdad en los departamentos de Colombia (Galvis and Meisel 2010). Además hay evidencia que muestra que factores productivos, la violencia, la pobreza y la desigualdad afectan el crecimiento económico en Colombia (Cotte 2007).

Sobre el estudio microfundado sobre la desigualdad en Colombia, hay factores persistentes y transitorios en la determinación en el periodo 1978-1995. Entre los factores persistentes, resaltan cambios de composición demográfica, la entrada de las mujeres al mercado laboral y un decrecimiento en el tamaño de las familias. Entre los factores transitorios marcan dinámicas del mercado laboral que han afectado el diferencial de salarios. Especialmente, ha habido un aumento en la informalidad del trabajo, generando mayor desigualdad (Velez, et al. 2005). Hay varios autores que enfatizan en la brecha salarial entre los trabajadores calificados y no calificados como uno de los principales componentes que explican la

persistencia en la desigualdad en Colombia (Velez, et al. 2005; Azevedo, Inchauste and Sanfelice 2012; Bonilla, 2011; DNP, 2013; Granda and Hamman 2015, Gasparini and Lustig 2011).

Más específicamente uno de los componentes principales de la magnitud de esta brecha es la desigualdad educativa. Como encuentra Bourguignon y otros autores en su libro, hay un patrón en varios países de América Latina, que denomina la “Paradoja de la Educación”. Esta consiste en que, contrario a la intuición, un aumento en la educación (medida de distintas maneras), aumenta la desigualdad de ingresos (Bourguignon, Ferreira and Lustig 2005). Explica para el caso colombiano, que dicho fenómeno se debe a la alta convexidad de las funciones de retornos monetarios a la educación. De esta manera, cuando la población de menores recursos adquiere más años de escolaridad, aumenta la oferta de trabajadores medianamente calificados, bajando el salario promedio de este grupo. A la vez, el difícil acceso al sistema de educación terciaria y universitaria genera una escasa oferta laboral de empleados calificados, generando un salario superior para este grupo. Este fenómeno entonces, aumenta la desigualdad de ingresos, pese a que la población colombiana ha aumentado los años promedio de educación durante las últimas décadas (Velez, et al. 2005).

2.2. Las repercusiones negativas del conflicto armado en Colombia

El otro enfoque de investigación en el que se inserta este trabajo, es aquel que analiza los impactos que ha tenido el conflicto armado colombiano sobre distintos aspectos sociales y económicos de país. Aunque no se conocen estudios que busquen el impacto directo del conflicto armado sobre la desigualdad, sí hay estudios que analizan otro tipo de repercusiones que ha tenido la violencia. Hay un estudio que busca estudiar los impactos del conflicto sobre la salida de firmas del mercado, que puede generar una disminución en la productividad total en Colombia. Utilizando variables instrumentales, se encuentra que un aumento de 10% en la tasa de ataques en un municipio incrementa la tasa de salida de firmas en aproximadamente 10,3% (Camacho, Rodríguez and Zárate 2014). Otro estudio busca estudiar si el conflicto afecta la producción agropecuaria, especialmente de

los pequeños agricultores. Se encuentra que hay una relación no lineal, puesto que la productividad agrícola baja sustancialmente cuando se introducen grupos armados en el municipio, pero con el tiempo los agricultores se acostumbran a la presencia armada y aumentan su producción pero bajo una trayectoria de menores ingresos que aquellos municipios en ausencia del conflicto (Arias and Ibañez 2014). También hay otros estudios que se enfocan en las repercusiones de la violencia sobre el crecimiento económico y en general hay un consenso en la literatura acerca del decremento del crecimiento por causa del conflicto (Acemoglu, et al. 2007; 2001; DNP 2013; Camacho, Rodríguez and Zárata 2014, Villa, Restrepo and Moscoso 2014). En términos generales, la literatura encuentra un consenso en que la violencia ha perjudicado los aspectos económicos y sociales en Colombia, aunque, hasta donde se sabe, no ha habido ningún trabajo que explique estos efectos sobre la desigualdad monetaria para el caso colombiano.



3. Marco Teórico

Los enfoques teóricos para explicar las desigualdades distributivas se pueden catalogar en tres partes. La primera discute el papel teórico que juega la literatura en señalar algunas posibles causas que pueden generar o perpetuar la desigualdad monetaria en un país. Entre ellas se encuentra el inadecuado papel del Estado en su capacidad de redistribución, ya sea monetaria o en inversiones que mejoren las oportunidades sociales de la población más vulnerable.

Otro mecanismo que señala la teoría es la dependencia en la trayectoria que genera una alta desigualdad. En este caso particular, una desigualdad histórica puede generar mecanismos para perpetuar dicha desigualdad, de manera que la trayectoria sea de difícil modificación. Sin embargo, estos mecanismos teóricos no parecen explicar el fenómeno colombiano, ya que al examinar la empírea, la evidencia no señala en dirección de estos fenómenos.

Tomando estos dos fenómenos en consideración, parece existir alguna característica particularmente colombiana, que no está presente en otros países latinoamericanos. Este trabajo argumenta que el conflicto armado puede ser una causa intrínseca del caso colombiano que puede explicar la evidencia empírica que han encontrado otros trabajos.

Teóricamente podrían existir varios mecanismos que expliquen el alto nivel y la persistencia de la desigualdad en Colombia. La primera posible explicación para dicho fenómeno es la falta de atención que le otorga el gobierno a gastos sociales como educación o salud, o la falta de capacidad estatal para redistribuir adecuadamente el ingreso como manera de promover el desarrollo social de los sectores menos favorecidos. Modelos como los de Bourguignon (2004) buscan entender a la desigualdad a partir de su interacción con el crecimiento del PIB, y cómo esta interacción genera efectos sobre el nivel de pobreza. En este sentido, el autor establece que cambios en la distribución de los ingresos pueden ser muy importantes para explicar cambios en la cantidad de personas bajo la línea de pobreza, especialmente en el mediano plazo, muchas veces generando un impacto mayor que un aumento en el ingreso total de una población. Este se conoce como “efecto ingreso” ya que en este caso, si bien todas las personas tienen mayores recursos, la brecha entre ellos continúa siendo la misma. En contraste, una mayor distribución puede generar mayores aumentos en el bienestar que el crecimiento

económico. Así, explica que por ejemplo en Indonesia entre 1996 y 1999, en el que hubo una disminución del ingreso general de toda la población, pero el nivel de vida de la población aumentó debido a las políticas redistributivas incentivadas por el Estado (F. Bourguignon 2004).

Utilizando una lógica similar, Sen (1999) también introduce un marco teórico similar al de Bourguignon para explicar cambios en la esperanza de vida. Así, distingue entre dos procesos que pueden llevar a un aumento en el bienestar de la población o un aumento en la esperanza de vida: los “procesos mediados por el crecimiento” y los “procesos impulsado por la política social” (Sen 1999, p. 66). En los primeros, un aumento de bienestar se da por crecimiento económico, dándole mayores ingresos a una amplia base de personas. En este sentido el aumento del bienestar se da en parte por una mayor recaudación por parte del Estado que le permite invertir una mayor cantidad de recursos en salud, educación y otros servicios relevantes para aumentar el bienestar. Por otro lado, los procesos impulsados por la política social no disponen de un crecimiento económico, ni de mayores ingresos. Sin embargo, los gobiernos gastan una mayor proporción de su ingreso disponible en salud y educación, generando una mejora en el bienestar de la población a pesar de contar con la misma restricción presupuestaria. El autor cita los casos de Sri Lanka y Costa Rica entre otros, para dar ejemplos de estos procesos. El objetivo del autor en esta distinción es demostrar que no es necesario el crecimiento económico para posibilitar cambios en el bienestar, sino que también es posible generar dichos cambios a partir de alteraciones en la composición del gasto público.

Sin embargo, al estudiar la composición del gasto gubernamental, no parece haber evidencia suficiente para sugerir un reducido gasto fiscal en redistribución de ingresos, salud o educación. El Banco Mundial destaca a Colombia como uno de los países de América Latina que más gasta en temas sociales, junto a Argentina y Brasil (en promedio gastan 11.5% de su PIB en estos motivos).

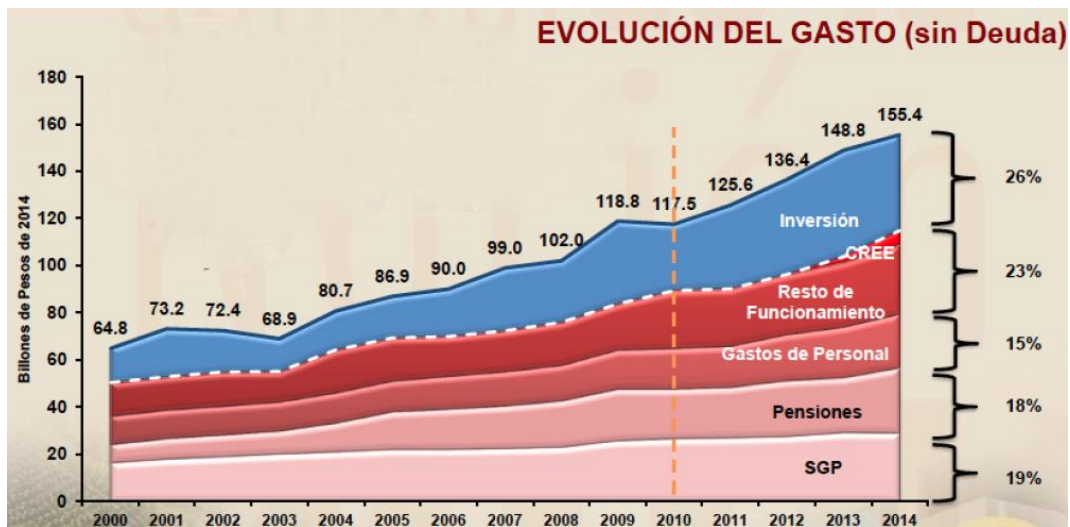
Gastos Sociales de Países Latinoamericanos

	<i>Países</i>		<i>Promedio y Mezcla de Gasto</i>		
			<i>Total Gasto Social</i>	<i>Seguridad Social</i>	<i>Asistencia Social</i>
Grupo 1: Mayor Gasto Social	Argentina, Chile, Uruguay	Brasil, Colombia,	Promedio: 11.5% del PBI. En su mayoría seguridad social	Promedio: 9.8% del PBI. Adultos mayores, discapacidad, desempleo y seguros	Promedio: 1.8% del PBI. En su mayoría transferencias monetarias
Grupo 2: Gasto Social Medio	Costa Rica, Paraguay, Venezuela	México, Perú,	Promedio: 3.7% del PBI. En su mayoría seguridad social	Promedio: 2.9% del PBI. En su mayoría pensiones.	Promedio: 0.8% del PBI. Mezcla de transferencias en especie y monetarias
Grupo 3: Menor Gasto Social	Guatemala, Nicaragua, Dominicana, Salvador	Honduras, República El	Promedio: 1.9% del PBI. En su mayoría asistencia social	Promedio: 0.3% del PBI. En su mayoría pensiones.	Promedio: 1.6% del PBI. En su mayoría transferencias en especie. Algunos inciendo transferencias monetarias condicionales.

Fuente: Banco Mundial (Lindert, Skoufias and Shapiro 2006)

Además, como se puede denotar en el gráfico de la evolución del gasto gubernamental, se destaca que entre las Pensiones y el Sistema General de Participaciones se atribuye 37% del gasto total del gobierno nacional en el 2014. El Sistema General de Participaciones engloba las trasferencias del Gobierno Nacional a los departamentos, los cuales deben ejecutar dicho presupuesto a nivel local en salud y educación. El gasto social colombiano equivale a un 13% del PIB nacional, una cifra muy superior al 8.3% que destina Estados Unidos a este propósito (Lindert, Skoufias and Shapiro 2006). Tomando en cuenta la alta proporción del presupuesto nacional destinado a inversión en capital humano y seguridad social, no parece haber evidencia de una falta de atención gubernamental en temas de redistribución, refutando los mecanismos teóricos señalados por Bourguignon y Sen. Esto implica que debe haber otros mecanismos que explique el nivel y tendencia de la desigualdad de ingresos en Colombia. Además, programas de transferencia condicional como Familias en Acción, que busca aumentar la inserción escolar y la provisión de vacunas básicas, ha sido positivamente evaluadas por varios estudios. Aunque este programa sí logró cumplir parcialmente sus objetivos de corto plazo, estos estudios cuestionan su capacidad de abordar temas más estructurales y complejos relevantes a la persistencia de trampas de pobreza (Rawlings and Rubio 2005).

Evolución de la Composición del Gasto del Gobierno Nacional



Fuente: Presidencia de la Nación (Ministerio de Hacienda y Crédito Público 2014)

Acemoglu y Robinson (2012) presentan otro marco teórico que posiblemente podría responder esta cuestión. Los autores señalan que existe un círculo vicioso entre la creación de fuerzas poderosas dirigidas a perpetuar instituciones económicas extractivas que a su vez crean instituciones políticas extractivas que favorecen a su vez la perpetuación de la misma dinámica. Además, “la violencia y la falta de instituciones estatales centralizadas inician una relación simbiótica con los políticos que dirigen las partes funcionales de la sociedad....las instituciones políticas de Colombia no generan incentivos para que los políticos proporcionen servicios públicos y ley y orden en gran parte del país y no les ponen límites suficientes para evitar que hagan tratos...con los paramilitares y criminales.” (Acemoglu and Robinson 2012, pg. 427). Así presentan una explicación de la persistencia de la desigualdad en América Latina, a partir de las instituciones que se establecieron con la colonización. (Acemoglu, Johnson and Robinson 2001). Esta lógica consiste en tomar en cuenta los *negative feedback loops* que se genera la coyuntura histórica particular del tipo de colonización. Así, resaltan los autores lo difícil que resulta modificar instituciones que ya están arraigadas y cómo éstas profundizan la desigualdad de poder que inicialmente generan, puesto que aquellos actores inicialmente en el poder tienen incentivos para generar instituciones que perpetúen su poder de facto. Esta explicación puede proveer un marco teórico adecuado para explicar la persistencia de la desigualdad en América Latina, especialmente en épocas anteriores al milenio. Sin embargo, esta visión de

perpetuación institucional no puede explicar la reversión de esta tendencia en una gran porción de los países latinoamericanos durante la primera década del siglo XX. Como se puede ver en el gráfico presentado en la introducción, a pesar de contar con instituciones “extractivas” que se replican a sí mismas, los Estados Latinoamericanos han logrado bajar sus índices de desigualdad monetaria sustancialmente. Estudios del Banco Mundial, aunque reconocen los resultados heterogéneos que presentan los distintos países, en general atribuyen una gran parte de esta disminución de la brecha de ingresos a nivel latinoamericano al buen manejo de programas de asistencia y protección social y su claridad en identificar adecuadamente las familias objetivo (Lindert, Skoufias and Shapiro 2006). Esta tendencia regional, sumado al alto gasto social que ejecuta el Gobierno colombiano, genera la intriga de ¿por qué otros países latinoamericanos sí lograron bajar sus tasas de desigualdad en la distribución de ingresos, mientras que Colombia, ejecutando una inversión social similar, no logró mayores cambios distributivos? El impacto que ha tenido la violencia sobre la desigualdad, busca saltar esta brecha entre la teoría y la empírea.



Universidad de
San Andrés

4. El conflicto armado y la desigualdad

El Conflicto Armado ha generado costos multidimensionales sobre el bienestar de la población colombiana. Aunque la desigualdad fue uno de los agravios que motivaron ideológicamente el surgimiento de guerrillas de izquierda en los sesentas, estos grupos se han transformado en los últimos años en superestructuras complejas, de narcotráfico y redes organizacionales que se han formado tal de lograr una ocupación territorial. Hay evidencia de un nexo causal grande y estadísticamente significativo entre el narcotráfico y los principales índices del nivel de violencia en Colombia (Angrist and Kruger 2008). La persistencia de la violencia y la ocupación de estos grupos armados son un factor primordial para entender la situación particular de Colombia en términos de distribución de ingresos. Existen varios mecanismos a través de los cuales la violencia puede perpetuar la brecha de ingresos: algunos mecanismos generan impactos directos, donde la violencia impacta a la desigualdad a través de mecanismos claros y discernibles. Estos incluyen efectos sobre el mercado laboral, la destrucción de capital, e impactos sobre la educación.

Por otra parte, existen otros mecanismos indirectos que son más complejos y se pueden explicar a través de las externalidades que puede generar el conflicto armado sobre otras variables. Entre estos, existe un claro costo de oportunidad generado por el alto gasto en defensa que ejecuta el Gobierno Nacional. En el 2014, este compuso 17.9% del gasto gubernamental total. Eso es superior a la porción de presupuesto estadounidense que se halla en 16.5% (World Bank 2015). Aunque en ausencia de conflicto, se puede suponer que este presupuesto se reduciría, no queda claro en qué se invertiría dicha suma, aunque es probable que el sector social reciba mayor financiamiento. Además varios autores han destacado la fragmentación en la estructura tributaria y la presencia de numerosas exenciones genera difícil una recaudación efectiva sobre la riqueza e ingresos de la población de mayores ingresos (Juniguito and Rincon 2007, Goñi and Lopez 2011, Moller 2012).

Composición del Gasto del Gobierno Nacional en el 2014

SECTOR	Funcionamiento	Inversión	TOTAL	Participación Relativa
DEFENSA Y POLICIA	25.546	2.198	27.744	17,9%
EDUCACION	25.082	2.194	27.276	17,6%
TRABAJO	20.460	3.997	24.457	15,7%
SALUD Y PROTECCION SOCIAL	13.805	4.199	18.004	11,6%
HACIENDA	12.272	2.234	14.506	9,3%
INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION	1.271	7.476	8.747	5,6%
TRANSPORTE	628	6.728	7.356	4,7%
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	1.526	2.007	3.533	2,3%
RAMA JUDICIAL	2.566	300	2.866	1,8%
MINAS Y ENERGIA	488	2.362	2.850	1,8%
JUSTICIA Y DEL DERECHO	2.030	617	2.647	1,7%
FISCALIA	2.346	144	2.490	1,6%
AGROPECUARIO	420	1.684	2.105	1,4%
COMUNICACIONES	538	1.406	1.944	1,3%
ORGANISMOS DE CONTROL	1.337	70	1.407	0,9%
PLANEACION	196	839	1.035	0,7%
REGISTRADURIA	726	94	820	0,5%
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	535	261	796	0,5%
INTERIOR	708	56	764	0,5%
RELACIONES EXTERIORES	600	57	657	0,4%
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	450	167	617	0,4%
INFORMACION ESTADISTICA	127	410	537	0,3%
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	268	224	492	0,3%
CONGRESO DE LA REPUBLICA	418	33	451	0,3%
CIENCIA Y TECNOLOGIA	18	324	342	0,2%
CULTURA	210	132	342	0,2%
DEPORTE Y RECREACION	25	247	272	0,2%
EMPLEO PUBLICO	99	128	228	0,1%
INTELIGENCIA	113	20	134	0,1%
TOTAL PGN	114.810	40.608	155.418	100,0%

Fuente: Presidencia de la nación (Ministerio de Hacienda y Crédito Público 2014)

Además, hay un posible canal político a través del cual el conflicto armado puede influir sobre la persistencia de la desigualdad. En una porción significativa de la opinión pública la izquierda política se ha asociado a los actos violentos de la guerrilla con ideología similar. Esto, sumado a la creciente inseguridad que ha generado el conflicto, han polarizado a una porción de la población a elegir dirigentes cuya prioridad es la seguridad, y no la redistribución o inversión en capital humano (Guzman and Fals-Borda 1963).

Sin embargo, aunque los canales indirectos presentan interesantes conceptualmente, empíricamente son difíciles de medir y separarlos de otras fuerzas sociales involucradas. Por esta razón, este trabajo se enfocará en los mecanismos directos a través de los cuales la violencia puede ser un factor explicativo para la persistencia de la desigualdad en Colombia.

4.1. El efecto distributivo de la salida de firmas rurales

Durante los años noventa, hubo una apertura comercial que generó una entrada de capitales al país. Aunque esta financiación se destinó a inversión en sectores de manufactura y textiles, la mayoría fue inversión en capital y parcialmente se tradujo en aumentos de salarios de trabajadores calificados. Sin embargo, debido a la presencia del conflicto armado en zonas rurales, esta entrada de capital se concentró en sectores reducidos en las zonas urbanas. Debido a que las empresas ubicadas en áreas periféricas enfrentaban mayores costos, ya que debían invertir en protección, seguridad, y vigilancia, la expectativa del retorno de estas empresas era menor que aquellas empresas urbanas. Además, el riesgo constante al que se enfrentan dichos negocios, generaba que las tasas de interés a las que se enfrentaban fueran mayores a las que se enfrentaban otras empresas urbanas, o fuera de la zona de conflicto. Tomando esto en cuenta, el conflicto genera un decrecimiento en la producción en las empresas que se encuentran en zonas de conflicto, y aumenta la probabilidad de que éstas enfrenten salidas forzadas del mercado, o desplacen sus sedes a zonas menos riesgosas. Un estudio ejecutado por el Departamento de Economía de la Universidad de los Andes encontró que un aumento en 10% en ataques provenientes del conflicto armado incrementa la tasa de salida de firmas del mercado en el municipio en 10,3% (Arias, et al. 2014).

Este fenómeno tiene dos repercusiones sobre la distribución de ingresos. En primer lugar, la incertidumbre y riesgo que enfrentan los emprendimientos rurales, implican que la entrada de capitales se concentre en sectores muy reducidos en áreas urbanas, con el alto costo de oportunidad de financiar actividades agrícolas u otros sectores rurales de manera más extendida. Este mecanismo es consistente con la evidencia empírica. El 10% más rico de la población colombiana deviene 42% del ingreso total del país. Esta porción es significativamente superior al 37%, correspondiente al promedio de este mismo indicador para los países latinoamericanos (World Bank 2015).

El segundo impacto distributivo consta de las implicancias que tiene la composición de dichas empresas rurales que se ven perjudicadas por el conflicto. Debido a que estas firmas se especializan en áreas de producción agrícola y

manufacturera, son trabajo intensivas. Esto implica que el deterioro o la salida del mercado de estas firmas, genera un mayor impacto sobre el mercado laboral que a la pérdida de capital físico, generado por costos hundidos o destrucción de infraestructura. Además, los altos costos que enfrentan (generados por las altas primas de riesgo, así como los costos en seguridad y vigilancia), disminuyen los incentivos de la firma a contratar más personal. Esto, sumado a la incertidumbre frente al tiempo que perdurará el negocio, genera que no sean muy rentables contratos formales, y más bien optan por empleos informales de menor remuneración. De esta manera, queda claro que el efecto peyorativo que genera el conflicto armado sobre las firmas rurales conlleva un efecto distributivo dual: la concentración de riqueza en sectores urbanos reducidos, y el empobrecimiento, informalidad, y desempleo de los trabajadores rurales. Ambos de estos fenómenos impulsan un incremento en la desigualdad en la distribución de ingresos.

4.2. Efecto de la violencia sobre la distribución educativa

El conflicto armado también genera repercusiones negativas en distintos aspectos relacionados con educación; especialmente en el acceso, la calidad de los servicios, la deserción escolar y la movilidad intergeneracional de los años estudiados. La presencia de grupos armados, o de violencia rural, dificulta el acceso de los niños y jóvenes a atender las escuelas (Sarmiento Gómez, Perla Tovar and Alam 2001). Debido a que en muchas áreas rurales colombianas hay poca densidad poblacional, los niños enfrentan altos costos de transporte para asistir a sus clases. Así, la violencia aumenta la inseguridad y el riesgo que enfrentan los niños en su desplazamiento hacia la escuela, puesto que hay riesgo de secuestro, o de quedar atrapados en medio de un enfrentamiento militar. Este fenómeno, sumando al costo de oportunidad que genera estudiar en vez de trabajar en las fincas familiares, es mayor para familias campesinas de bajos ingresos, donde la utilidad marginal del ingreso es mucho mayor que para otros sectores sociales.

Además, el conflicto impacta sobre la calidad de educación que reciben los jóvenes, debido a que las profesoras que cuentan con mayor capacitación son asignadas a zonas de menor riesgo, mientras que las maestras con menor

formación se asignan a zonas de conflicto (Sarmiento Gómez, Perla Tovar and Alam 2001). Debido al difícil acceso, sumado a la baja calidad educativa y el costo de oportunidad de trabajar en las fincas, la deserción escolar es más alta en zonas de conflicto. Rodríguez y Sánchez (2012) estiman el impacto que ha tenido el conflicto armado sobre la acumulación de capital humano en el país. Los autores demuestran que el conflicto armado aumenta la tasa de deserción escolar de los estudiantes, lo que implica que estos alumnos tendrían entre 0,6 y 1,2 años más de educación en ausencia de conflicto (Rodríguez, Sánchez Torres and Márquez Zuñiga 2012). Otro estudio evalúa el impacto de la violencia sobre el estrés que sufren las madres en periodo de gestación debido a ataques directos de grupos armados en su municipio. Así, se encuentra que la exposición al conflicto de estas madres, aumenta la probabilidad de deserción escolar de sus hijos (Vanegas Barrero 2012). Además, otro trabajo encuentra que la probabilidad de que un individuo entre los cinco y los veinticuatro años se encuentre estudiando es de 0.7146 para las zonas urbanas, y .7094 para zonas rurales (Bonilla 2011). Aunque como se describió anteriormente, hay muchas otras razones por las cuales la deserción escolar es mayor en zonas rurales, estos datos son consistentes con las posibles implicancias que puede tener el conflicto sobre la deserción escolar.

Frente a los impactos distributivos que puede tener este canal educativo, hay una amplia literatura frente a los retornos positivos que conlleva tener un mayor nivel educativo, y las dificultades que enfrentan los jóvenes en asistir a la escuela, pueden generar repercusiones profundas sobre la trayectoria de ingresos intergeneracional que enfrentan estas familias. Especialmente en sectores periféricos, la movilidad intergeneracional de años de educación y de ingreso, es mucho menor que en escenarios urbanos (Bonilla 2011). Este mismo estudio resalta que Colombia y Brasil tienen la menor movilidad intergeneracional de educación de América Latina. Además, el reducido acceso a educación superior genera escasez relativa de mano de obra calificada, aumentando su salario de equilibrio. De esta manera, la violencia implica una trayectoria de menores ingresos para estas familias, manteniendo la alta brecha distributiva.

4.3. Efecto de la violencia sobre el mercado laboral

Por último, la violencia generada por el enfrentamiento de grupos armados impacta directamente al mercado laboral urbano y rural. El desplazamiento forzado incitado por la violencia, genera la migración de una porción sustancial de la población hacia áreas urbanas. Por otro lado, en el mercado laboral rural, la violencia y el narcotráfico afectan a los pequeños agricultores y concentran riqueza y tierras en manos de narcotraficantes.

4.3.1. Lo Urbano: Brecha y mercado laboral

El principal mecanismo distributivo que genera el Conflicto Armado colombiano, es el efecto peyorativo que genera el desplazamiento forzoso sobre el mercado laboral. Entre 1999 y 2013, 4,7 millones de colombianos, equivalente a 10% de la población colombiana, fueron desplazados por la violencia, de zonas en conflicto a las grandes ciudades. De estos, 55% tenían acceso a tierras y eran productores agropecuarios. Esta reducción en producción agropecuaria conlleva a 4,3% de menor crecimiento del PIB cada año (Arias and Ibañez 2014). Además, esta población desplazada posee características sociales que la posiciona en entornos vulnerables y de difícil movilidad social. Así, por ejemplo, Bonilla (2011) encuentra que la población migrante al interior del país tiene en promedio menos años de educación que la población sedentaria. Este fenómeno sumando a la baja movilidad intergeneracional de la educación, genera obstáculos de progreso económico para estas familias (Bonilla 2011). Así, otro estudio elaborado por la Universidad de los Andes encuentra que los hogares ocupados por familias que han sido desplazadas por la violencia poseen grandes dificultades para recuperarse de las pérdidas económicas e inestabilidad psicológica generada por la migración forzada, y tienen mayor probabilidad de mantenerse inmersos en una trampa de pobreza (Arias, et al. 2014).

Para entender a mayor profundidad el impacto distributivo del desplazamiento, es importante resaltar algunos mecanismos que caracterizan el mercado laboral colombiano independientemente del conflicto armado. En Colombia, el acceso a educación terciaria o universitaria es muy restringida, puesto

que hay pocas universidades públicas, con pocos cupos, considerando la demanda de estudiantes que buscan inscribirse a estas instituciones; explicando una fuerza de mano de obra calificada reducida. Además, aunque Colombia ha logrado aumentar sus índices de escolaridad secundaria en la última década (Sarmiento Gómez, Perla Tovar and Alam 2001), contra intuitivamente esta tendencia ha sido perjudicial en términos distributivos. Ha habido evidencia de este fenómeno en otros países latinoamericanos, y es lo que Bourguignon ha denominado “La Paradoja de la Educación” (Bourguignon, Ferreira and Lustig 2005). Ésta consiste en el contraposición entre dos objetivos sociales: disminuir la brecha de ingresos y aumentar los niveles de educación que recibe la población. Así, si bien hay un consenso en política pública que mayores niveles educativos para toda la población aumenta la capacitación del capital humano y por ende mejora la productividad, la calidad de vida, y el crecimiento de un país, Bourguignon señala que, en economías que se encuentran en fases intermedias de aumentos en educación (aumentar las tasas de escolaridad primaria y secundaria), un mejoramiento en estos aspectos genera un impacto distributivo peyorativo. Esto sucede porque aumenta la oferta de mano de obra medianamente calificada (con nivel de secundaria completa), disminuyendo el salario de equilibrio de esta población. Este fenómeno, sumado a la escasa oferta laboral calificada genera una convexidad significativa en la curva de retornos a la educación, aumentando la desigualdad en la distribución de ingresos. Así, hay varios autores que enfatizan la brecha salarial entre los trabajadores calificados y no calificados como uno de los principales componentes que explican la persistencia en la desigualdad en Colombia de manera descriptiva (Velez, et al. 2005; Azevedo, Inchauste and Sanfelice 2012; Bonilla, 2011; DNP, 2013; Granda and Hamman 2015, Gasparini and Lustig 2011).

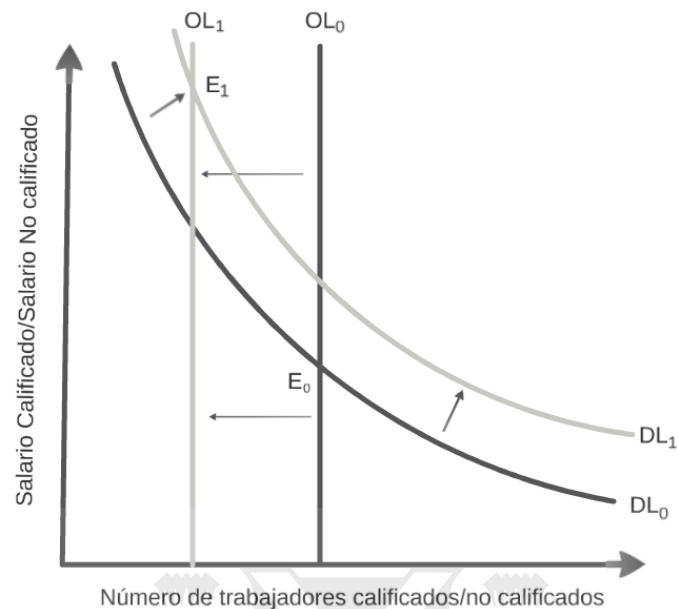
Tomando estas características estructurales del mercado laboral colombiano, es posible desentrañar el impacto distributivo que tiene el desplazamiento forzado generado por el conflicto armado. La migración de personas capacitadas en trabajos manuales y agrícolas, a ciudades que tienen baja demanda de este tipo de habilidades genera un aumento en mano de obra no calificada en las ciudades grandes, bajando el salario de equilibrio, y, debido a rigideces en los mercados laborales, el desplazamiento conlleva inevitablemente a

un aumento de la informalidad laboral y el desempleo. 48,7% es la tasa de informalidad laboral, mientras la tasa de desempleo en Colombia es de 9,1%, la cifra más baja de los últimos 14 años, con notables alzas en 1999 donde el desempleo llegó a 19%, y 11% en el 2010 a comparación del promedio latinoamericano de 6,2% (World Bank 2015).

Imperfecciones en el mercado laboral como el salario mínimo, las prestaciones sociales y otros costos que deben enfrentar las empresas al contratar empleos formales son especialmente relevantes. Un estudio que ejecutó el Banco Mundial señala que los costos en parafiscales y otras prestaciones sociales que deben enfrentar las empresas en la contratación de empleo formal son más altos que otros países de ingresos medios (Moller 2012). Este fenómeno, se sumó a un incremento en la demanda de trabajo calificado, debido por los avances tecnológicos que acompañaron la entrada de capitales y posterior inversiones concentradas en empresas de servicios más complejos y urbanos. Debido a la ya comentada escasez de mano de obra calificada, los salarios de este grupo subieron en equilibrio, aumentando la brecha salarial entre los trabajadores calificados y los no calificados.

Además, la creciente informalidad laboral y desempleo que siguió al desplazamiento, contribuyeron aun más a aumentar la brecha de ingresos y de calidad de vida. Los desplazados llegan a las ciudades con pocas pertenencias, y en la mayoría de los casos, sin un hogar estable al cual llegar. La falta de bienes para dejar como garantía, así como el riesgo de default que presentan estas personas frente a instituciones financieras genera que esta población se enfrente a altas tasas de interés y disminuya su capacidad de mejorar su situación. Este panorama es consistente con estudios empíricos que enfatizan en la brecha salarial entre los trabajadores calificados y no calificados como uno de los principales componentes que explican la persistencia en la desigualdad en Colombia (Velez, et al. 2005; Azevedo, Inchauste and Sanfelice 2012; Bonilla, 2011; DNP, 2013; Granda and Hamman 2015, Gasparini and Lustig 2011).

Modelo del Impacto del Conflicto Armado sobre el Mercado Laboral Urbano



Fuente: Elaboración Propia

El impacto del conflicto armado sobre el mercado laboral urbano puede analizarse bajo un modelo simple de estática comparativa. El desplazamiento forzoso a zonas urbanas, genera un aumento en la mano de obra no calificada. Esto equivale a una disminución en la proporción de la oferta laboral calificada relativa a la no calificada. Con una demanda de trabajo constante, esto genera un aumento en el diferencial salarial entre empleados calificados y no calificados. Sin embargo, como se mencionó previamente, durante los años noventa hubo una entrada de capitales que se tradujo en mayor inversión y en una mayor demanda laboral, y por ende un desplazamiento de la curva de oferta laboral hacia arriba. El efecto conjunto de estos dos fenómenos genera un aumento de la brecha salarial aún mayor, desplazando el equilibrio del mercado laboral de E₀ a E₁.

Este modelo sencillo también puede explicar el impacto del conflicto armado sobre la brecha educativa. Como se abordó anteriormente, la violencia genera un aumento de la deserción escolar, bajando los años de educación promedio que reciben los jóvenes. Aunque el modelo no captura la diferencia de niveles de empleo no calificado, es claro que una mayor población con menos años de educación, traduce en una mayor cantidad de trabajadores no calificados.

Además, el acceso restringido y reducido al sistema de educación terciario o universitario, explica una reducida porción de trabajadores calificados. Estas dos características se traducen en una reducción del ratio de oferta laboral.

4.3.2. Lo Rural: El campesinado y el narcotráfico

La configuración geográfica de las zonas más vulnerables se concentra primordialmente en el campo y en zonas rurales. En 1993, 56% de los municipios que se encontraban en trampa de pobreza pertenecían a la periferia. Consecuente con la hipótesis de la intensidad y mayor financiamiento de grupos armados ilegales durante los años noventa, esta proporción aumentó a 70% en el 2005.

Un estudio que estudia los impactos redistributivos de la violencia generada por el narcotráfico en México, encuentra que la violencia impacta los precios de las viviendas de menores ingresos. Así, un incremento en una desviación estándar en la tasa de homicidios, genera una disminución en el precio de estos hogares en 3% (Azejnman, Galiani and Seira 2014). Si existiera un canal similar en el caso colombiano, los sectores de menores ingresos deberían encontrar una disminución del precio de su hogares, y por ende contribuyendo a empobrecerlos, en caso de querer participar en el mercado inmobiliario.

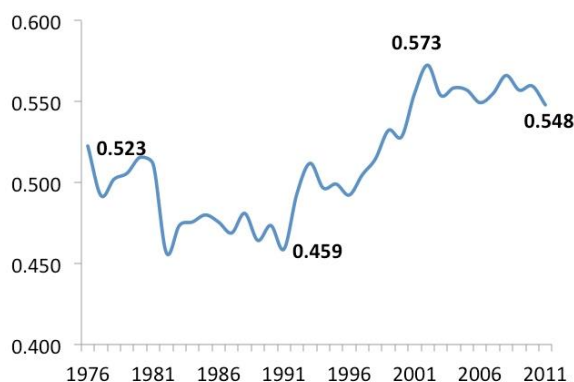
Por otra parte, los grupos armados despojan forzosamente a pequeños propietarios de tierras, para dedicar éstas al cultivo de coca, o posicionarse estratégicamente. Además, el robo de infraestructura de campo, destrucción de canales de transporte, y quema de cultivos generan pérdidas en el bienestar e ingresos de los campesinos. Un estudio mide el impacto que tiene el conflicto sobre la producción agropecuaria para personas que poseen pequeñas parcelas de tierra. Concluyen que la incertidumbre generada por el conflicto implica que estos individuos asumen la posibilidad de ser despojados de sus tierras, y por ende enfocan su producción a cultivos que produzcan beneficios económicos a corto plazo. El remplazo de cultivos permanentes a cultivos transitorios, ganadería, u otras actividades rentables en el corto plazo, generan pérdidas de productividad en el largo plazo. Debido a la incertidumbre, no hay inversión de largo plazo en manutención de suelos, o compra de maquinaria, disminuyendo los ingresos de

esta población. Los autores encuentran que con la introducción de grupos armados al territorio, inicialmente baja la producción agrícola, y posteriormente los individuos se acostumbran a vivir en medio del conflicto, pero bajo una trayectoria de menor ingresos que en ausencia de conflicto (Arias and Ibañez 2014).

Por otra parte, los ingresos que reciben los grupos armados del narcotráfico se convierten en poder de facto en zonas rurales. La concentración de ingresos ilícitos de estos grupos, junto con el lavado de activos, concentran riqueza en una reducida porción de la población. Similarmente, el despojo forzoso de tierra, así como la compra de grandes extensiones del territorio a partir de dineros provenientes del negocio de las drogas, aumentan la desigualdad en la tenencia de tierra. Aunque la desigualdad de la tenencia de tierra no refleja las mismas dotaciones que generan los ingresos, sí existe una alta correlación entre la tenencia de tierra y los ingresos de los terratenientes. Como se puede observar en la tabla, la desigualdad de tierras en Colombia es extremadamente alta, correspondiente a un índice GINI de 88,5 en el 2009, muy superior a la desigualdad de ingresos (Gómez Guzmán 2012). Además tiene una leve tendencia creciente en los últimos cincuenta años. Estos dos fenómenos resaltan cómo mecanismos relacionados a procesos rurales generados por el conflicto armado forjan una mayor brecha distributiva, tanto en la tenencia de tierra como en los ingresos.

La gran paradoja de las guerrillas se encuentra en su inicial consolidación a partir de la convicción de la injusticia en términos distributivos, tanto en ingresos, como en tierras. Pero pese a su determinación en la creencia en que la lucha armada impulsaría un cambio hacia mayor equidad distributiva, la evidencia sugiere que la brecha distributiva tanto en tierras como en ingreso ha aumentado a partir del fortalecimiento de estos grupos en los años noventas con el auge del narcotráfico. Aunque formalmente la simultaneidad del fortalecimiento de grupos ilícitos y el aumento en la desigualdad no determina la causalidad de dicho fenómeno, los mecanismos estudiados escrupulosamente son consistentes con esta hipótesis.

Índice GINI histórico de la distribución de ingresos en Colombia



Fuente: Elaboración Propia a partir de Base de Datos del DANE

Índice GINI de la distribución de tierra rural en Colombia:

Recopilación de varios autores

año	cega	mesa	Machado	Rincón	Castaño	Ossa	DNP	offstein	Atlas
1960	0,841	0,8677							
1970	0,84								
1984	0,851		0,839	0,819	0,836	0,839			
1988		0,8403							
1997			0,88	0,801	0,843	0,863			
2002							0,878	0,854 a	
								0,810 b.	
2009									0,885 a
									0,854 b.

Fuentes: Cega: Luis Llorente, Armando Salazar y Angela Gallo. Distribución de la propiedad rural en Colombia 1960-1984. Cega-Minagricultura 1985. Misión de estudios del sector agropecuario 1988. Absalón, Machado: La cuestión agraria en Colombia has. fines del milenio. Universidad Nacional, 1999. Y Ossa, Carlos et Al. Análisis sobre la distribución de la Propiedad rural de la tierra en Colombia 1985-1996 y los determinantes de los cambios. Documento de trabajo 1998. DNP-Banco Mundial. Colombia en transición 2002.

Cálculos Gini tierras excepto: Offstein: Gini filtrados : Offstein: ^a. Tierra b^a Avalúo. Gran Atlas, 2010 : ^a Propietarios, ^bTierras

Fuente: (Gómez Guzmán 2012)

Tomando en cuenta este análisis, los resultados cualitativos principales muestran una interrelación entre la salida de firmas rurales del mercado, el aumento de la brecha educativa, y el papel del desplazamiento y otros cambios rurales en explicar variaciones en el mercado laboral. La salida de firmas del mercado en zonas de conflicto o su desplazamiento hacia lugares más seguros tienen consecuencias distributivas. En primer lugar, debido al peligro asociado a invertir en estas mercados, se genera una concentración de capitales en las ciudades, aumentando los ingresos de un grupo reducido de individuos. Además,

las empresas localizadas en zonas rurales se especializan en actividades trabajo intensivas, y con su salida del mercado, impactan en mayor proporción a los trabajadores no calificados, que a inversiones en capital físico.

En segundo lugar, las características particulares de la estructura de retornos a la educación junto con efectos que tiene la violencia sobre la educación aumenta la brecha educativa, y consecuentemente la desigualdad en el retorno esperado por años de educación. En términos generales, la violencia dificulta el acceso a la educación de los jóvenes y aumenta la deserción escolar. Esto genera una mayor porción de la población con escasos años de educación. Este hecho sumado a la fuerte convexidad de los retornos a la educación que presenta el caso colombiano, tiene implicancias negativas sobre la distribución de ingresos.

En tercer lugar, la violencia generada por el enfrentamiento de grupos armados impacta directamente al mercado laboral urbano y rural. Con el desplazamiento forzado que genera la violencia, se da una migración hacia áreas urbanas de personas capacitadas en oficios rurales, y por ende generan un aumento en la oferta del trabajo no calificado en las ciudades. Así, se genera una disminución del salario real de trabajadores no calificados y debido a rigideces salariales, un aumento en el desempleo urbano.

Sobre el mercado laboral rural, la violencia también aumenta la brecha de ingresos, ya que los grupos armados destruyen infraestructura y generan incentivos para que los pequeños agricultores se desplacen hacia una trayectoria de menores ingresos. Además, la concentración de riqueza rural genera por el narcotráfico, aumenta la compra de tierras por parte de narcotraficantes, traduciéndose en mayores ingresos provenientes del uso productivo de la tierra. La composición de estos mecanismos sugieren que el conflicto armado forja claras repercusiones negativas sobre la distribución de ingresos.

5. Metodología Empírica

Para estudiar empíricamente la relación entre violencia y desigualdad, se explora cuáles indicadores del conflicto armado son más relevantes para entender las variaciones en la distribución de ingresos. Entre estos indicadores, se evaluará principalmente el papel que juega el Estado, los grupos guerrilleros, los paramilitares y las dinámicas violentas que se generan entre estos grupos, para pensar cuáles son los grupos que mejor explican los impactos distributivos negativos analizados en secciones anteriores.

Para este propósito, se utilizará la estimación por mínimos cuadrados ordinarios utilizando varios indicadores del conflicto armado para explicar la desigualdad en la distribución de ingresos a nivel departamental. Debido a la heterogeneidad geográfica, cultural, y socio-económica, y la disposición de datos en forma de panel, se utilizará una estimación por efectos fijos para controlar por factores inobservables de los departamentos, que podrían generar sesgos en la estimación por variables omitidas. Aunque es plausible pensar en que esta relación puede tener factores endógenos, los mecanismos explicados en profundidad en este trabajo fundamentados tanto en explicaciones económicas como en evidencia empírica, proveen un análisis cualitativo sobre varios canales a través de los cuales el conflicto influye sobre la desigualdad en la distribución de ingresos. De esta manera, aunque los resultados econométricos obtenidos no se pueden leer como una prueba fehaciente de un impacto causal de manera formal, sí proveen evidencia consistente con la hipótesis de que la violencia tiene impactos distributivos peyorativos en el caso colombiano.

El modelo a estimar es:

$$GINI_{it} = \alpha_i + \beta X_{it} + \varepsilon_{it}$$

Donde los departamentos son indexados por i , y X es un vector variables de indicadores del conflicto armado.

5.1. Fuentes de Bases de Datos

Los datos acerca de la distribución de ingresos provienen del Departamento Administrativo de Estadística (DANE). La base de datos es en forma de panel, abarcando desde el año 1988 hasta el 2012, midiendo el Índice GINI a nivel departamental. Se optó por utilizar el Índice GINI como medición de desigualdad debido a que es una medida confiable y conocida de la desigualdad en la distribución de ingresos, y es la medida de desigualdad que provee el Departamento de Estadística. Este mide el ratio del área por encima de la curva de Lorenz sobre el total del área por debajo de la curva de 45 grados. Además, debido a que toma en cuenta la porción de personas que se hayan por debajo de cierta porción de ingreso y es una medida resumen de toda la distribución de ingresos. Otros estudios que utilizan metodologías de micro descomposición, resaltan la falta de micro fundamentos de utilizar este tipo de medidas resumen, ya que se pierde en el análisis las características de cada individuo y cómo su ingreso afecta a toda la distribución. Sin embargo, en el caso específico de este estudio, debido a que la violencia no es una característica individual, sino que mas bien afecta a una población en un territorio determinado, se considera que el índice GINI es idóneo para evaluar esta relación.

La información acerca del conflicto armado en Colombia, proviene de una base de datos elaborada por el Centro de Estudios de Análisis de Conflictos (CERAC), que se especializa en la medición de distintos aspectos del Conflicto Armado en Colombia. De esta manera, se toman en cuenta varios indicadores sobre la violencia atribuida al conflicto armado, en forma de panel, a nivel departamental, desde 1988 hasta el 2009. Además, esta base de datos se complementa con otra fuente de indicadores de violencia proveniente del Centro de Estudios sobre Desarrollo económico (CEDE), que forma parte del Departamento de Economía de la Universidad de los Andes. Para una descripción más detallada acerca de la medición de cada indicador, ver el Anexo 1 del presente trabajo.

Estadísticas Descriptivas

Variable	Obs	Media	SD	Mín	Máx
GINI	607	50.0318	3.4356	43.9	61.9
Eventos	726	16.96	28.483	0	774
Combates	726	16.96	28.483	0	283
Combates sin ataques	726	58.02	90.731	0	283
Ataques	726	42.779	67.389	0	627
Eventos con Guerrilla	726	32.1639	52.2938	0	471
Eventos con Paramilitares	726	6.9779	17.9279	0	421
Eventos con Fuerzas Estatales	726	29.3512	48.3318	0	421
Dummy Guerrilla	726	.1184	.3233	0	1
Dummy Paramilitares	726	.4105	.4922	0	1
Dummy Estado	726	.1157	.3201	0	1
Muertes Civiles	726	26.1101	59.4981	0	804
Muertes de Guerrilleros	726	28.2837	49.1889	0	156
Muertes de Paramilitares	726	4.3732	15.5365	0	156
Muertes de Militares	726	11.8195	17.9098	0	158

Debido al formato de los datos, las observaciones indican eventos relacionados al conflicto armado en un departamento determinado, en un año en particular. De esta manera, las medias de las variables toman en cuenta el promedio anual y departamental. Resalta del gráfico que el promedio de Índice GINI, tomando en cuenta estas dos dimensiones es de 50.0318, una cifra bastante alta al comparar con otros países latinoamericanos, como ya se profundizó en la introducción. Esto provee evidencia de que la desigualdad en Colombia no es un fenómeno reciente, sino que, por lo menos a partir de 1988, su persistencia es relevante. La otra característica que resalta de esta estadística, es su alta similitud a los índices GINI a nivel nacional. Esto sugiere que una alta porción de la desigualdad en Colombia se atribuye a desigualdad intradepartamental. Aunque sería más adecuado utilizar otros indicadores para medir esto con precisión, como el índice Thiel, sí brinda una intuición frente a alguna de las características de la desigualdad de ingresos en Colombia.

Por Eventos Violentos, CERAC define todo enfrentamiento armado, o cruce de fuego entre dos o más grupos. Esto implica que el atacante debe recibir una

reacción defensiva por parte del grupo siendo atacado. Aunque en promedio se dan 16,96 actos violentos por año, resalta mucho la amplia varianza de dichos eventos. Esto sugiere que la presencia del conflicto es muy heterogénea tomando en cuenta distintas zonas de país, así como distintos años. Por otro lado, se resalta que los actos violentos en los que la guerrilla es un actor partícipe, son de mayor cantidad que aquellos en los que participan los paramilitares. Mientras el promedio de eventos en los que se encuentra la guerrilla es de 32.1639, el equivalente para los paramilitares es de 6.9779. Las dummies correspondientes a los grupos armados, toman el valor de 1 si hubo algún evento violento de este grupo en el departamento ese año, y 0 si no hubo ninguno. De esta manera, la media de estas variables es una primera aproximación a entender la concentración de los ataques de los grupos armados, y si su presencia es dispersa sobre todo el país o concentrada en ciertas zonas específicas. No obstante, es sólo una aproximación, debido a que estas estadísticas también toman en cuenta las variaciones temporales, dificultando separar la dispersión territorial de la intensidad violenta en algún periodo de tiempo particular para el departamento. Sorprendentemente, el promedio de estas dummies es menor para la guerrilla y el Estado, que para los paramilitares. Esto es consistente con teorías que enfatizan la débil presencia estatal en muchas zonas periféricas del país. Además, es consistente con la hipótesis de que las FARC se concentra en ciertas zonas, y se mantiene alejado de otras. En contraste, en promedio los paramilitares se encuentran en .4105 de los eventos violentos, sugiriendo mayor dispersión de estos grupos. Las muertes civiles es una variable de gran interés para los estudiosos del Conflicto Armado. El hecho de que en promedio 26.1101 personas civiles mueran por causa de la guerra por año, por departamento, enfatiza los costos humanitarios que conlleva este conflicto. Además, se resalta la alta varianza que caracteriza a esta variable, con un desvío estándar de 59.4981, y un máximo de 804 personas asesinadas como colaterales en esta corta extensión de tiempo y limitado territorio. Estas preocupaciones humanitarias son un disparador para profundizar sobre la literatura acerca de los costos sociales que deviene el Conflicto armado en Colombia.

Estimación de Datos de Panel por Mínimos Cuadrados Ordinarios

VARIABLES	(1) POOLED	(2) FE	(3) FE INTER
Combates	0.110 (0.149)	0.0541 (0.125)	0.0564 (0.123)
Acciones unilaterales	-0.0428** (0.0207)	-0.0438* (0.0218)	-0.0466** (0.0214)
Eventos con Guerrilla	0.0519** (0.0252)	0.0580** (0.0260)	0.0600** (0.0264)
Eventos con Paramilitares	0.0480** (0.0241)	0.0501* (0.0279)	0.0543* (0.0277)
Eventos con Fuerzas Estatales	0.077*** (0.0246)	0.0827*** (0.0263)	0.0854*** (0.0250)
Combates Estado y Guerrilla	-0.274* (0.155)	-0.224 (0.152)	-0.232 (0.152)
Combates Estado y Paramilitares	-0.166 (0.180)	-0.173 (0.184)	-0.172 (0.179)
Combates Guerrilla y Paramilitares	0.0175 (0.170)	-0.00111 (0.135)	-0.00997 (0.136)
Guerrilla Dummy	0.829 (0.652)	-0.262 (0.717)	-1.197 (0.715)
Paramilitar Dummy	-1.807*** (0.290)	-2.317*** (0.297)	-2.880*** (0.408)
Estado Dummy	-1.055 (0.649)	-2.658*** (0.816)	-1.961** (0.822)
Muertes Civiles	0.000133 (0.00404)	0.000888 (0.0050)	0.00189 (0.00534)
Muertes Guerrilleros	-0.00586 (0.00537)	-0.00284 (0.00764)	-0.00280 (0.00752)
Muertes Paramilitares	0.00642 (0.0127)	0.0108 (0.0117)	0.0103 (0.0122)
Muertes Estatales	0.0116 (0.0100)	0.0105 (0.0118)	0.00889 (0.0119)
Guerrilla*Estado			0.215* (0.111)
Guerrilla*Paramilitares			0.0364** (0.0154)
Constante	50.66*** (0.238)	50.95*** (0.259)	51.03*** (0.278)
Observaciones	607	607	607
R-cuadrado	0.215	0.264	0.274
Número de Departamentos		33	33

Errores Estándar Robustos en Paréntesis *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

5.2. Análisis econométrico

Tomando en cuenta el R^2 , la tercera metodología cuenta con mayor bondad de ajuste a los datos. Esta tercera regresión es una estimación por Efectos Fijos, donde se incluyen dos términos de interacción: El primero es la interacción entre la Dummy que toma el valor de 1 si la guerrilla participó del evento violento, y 0 en el caso contrario, mientras que la variable Estado denota el total de eventos violentos en el participó el Estado en un departamento en un año determinado. Esta interacción sirve como proxy para desentrañar el efecto conjunto de violencia cuando existe la presencia tanto de eventos guerrilleros como estatales. El otro término de interacción es el efecto conjunto de la dummy Guerrilla previamente descrita, con el número de eventos en los que participó un grupo paramilitar por unidad de análisis. Estas interacciones se distinguen de las variables que miden la cantidad de combates entre grupos, ya que esta última es más limitada en el sentido de que se refiere sólo a enfrentamientos abiertos entre los dos grupos mencionados. A diferencia de esta medida, los términos de interacción son más amplios, ya que abarcan eventos del conflicto armado que pueden ser distintos a combates abiertos, y miden el efecto dicotómico de la presencia de la guerrilla en dicho evento. Aunque algunos de los signos de los coeficientes parecen contra intuitivos, como aquellos relacionados con los combates, estos no son significativos estadísticamente, y por ende no presentan poder explicativo sobre el impacto distributivo.

Sin embargo, los resultados de las estimaciones sí son consistentes con la investigación cualitativa estudiada. Así, un aumento en un evento violento ejecutado por el Estado Nacional, en promedio aumenta el índice GINI en 0.0854 puntos, al mantener el resto de las variables fijas. Este efecto es significativo al 1%, implicando que hay una muy baja probabilidad de que este efecto denote una relación que verdaderamente no existe. También consistente con la teoría, un aumento en un evento en el que participa la guerrilla se acompaña de un aumento en la brecha de ingresos de 0.06 puntos en promedio *ceteris paribus*, a un nivel de 5% de confianza. Similarmente, el aumento de un acto violento con participación paramilitar aumenta el índice GINI en 0.0543 puntos GINI en promedio, si todo lo

demás se mantiene constante. Llama la atención que el involucramiento del Estado genere mayores efectos distributivos peyorativos que el de la guerrilla o los paramilitares, ya que una amplia porción de la población colombiana le atribuye mayor responsabilidad de los efectos sociales negativos del conflicto a las guerrillas que a otros grupos, incluyendo al Estado.

Además resulta interesante que los términos de interacción son factores explicativos relevantes. Al mirar la interacción entre los eventos violentos del Estado y la participación de las FARC en actos violentos, al 10% de confiabilidad, un aumento marginal en esta variable aumenta el índice GINI en 0.215 puntos en promedio, *ceteris paribus*. Este efecto marginal es sorprendentemente alto, considerando el carácter estructural de la desigualdad y consecuentemente su baja volatilidad y dificultad de modificar. Esto sugiere que la cantidad de actos violentos ejecutados por el gobierno en simultáneo con la participación de las FARC en algún acto violento implica un efecto distributivo que genera una clara divergencia de ingresos de magnitud significativa. Por otra parte, la cantidad de actos violentos en los que participan los grupos paramilitares en conjunción al involucramiento de las FARC, se acompaña de un efecto marginal distributivo de 0.0364, significativo al 5%.

Estos resultados empíricos exponen evidencia consistente con el efecto peyorativo que genera el conflicto sobre la desigualdad. No obstante, también manifiestan particularidades acerca de cuáles son algunos de los factores del conflicto armado que tienen mayor relevancia explicativa sobre esta cuestión. Así, aunque es de esperar que los eventos violentos con presencia de guerrilla, paramilitares o el Estado Nacional generen aumentos sobre el Índice GINI, es un hallazgo innovador e inesperado encontrar que los eventos violentos con presencia estatal explican mayores aumentos de desigualdad que aquellos en los que participan grupos guerrilleros o paramilitares. Por otra parte, la evidencia empírica que presentan los términos de interacción surgieron que los eventos violentos con presencia de guerrillas y Estado, así como entre guerrillas y paramilitares son un componente importante para entender la dinámica del aumento y persistencia de la desigualdad. No obstante, lo que más llama la atención es que el efecto marginal relacionado con la interacción de la guerrilla y el estado sea mucho mayor que los otros efectos comentados previamente. Esto

sugiere que entre los indicadores del conflicto armado que aumentan la desigualdad de ingresos, los eventos con presencia de guerrillas en conjunto con el Estado Nacional es un factor importante y preponderante para entender esta relación.

5.3. Análisis preliminar sobre la utilización de variables instrumentales

Sin embargo, bajo el marco de análisis de la regresión por efectos fijos, la correlación de interés que mide cómo los grupos armados afectan la distribución de ingresos no puede interpretarse de manera causal, ya que el conflicto y la distribución de los ingresos pueden determinarse simultáneamente. Algunos estudios relevantes como el de Persson y Tabellini (1991), han mostrado que la desigualdad es un incentivo prevalente para el inicio y la duración de los conflictos civiles. Según los autores, esto puede suceder por dos razones principales. En primer lugar, la concentración de riqueza, ingresos y otros recursos en una porción pequeña de la población, facilita la agresión selectiva hacia este pequeño grupo. Además, la amplia brecha distributiva puede generar resentimientos y conflictos de interés, sobre la cuestión acerca de a quién debería redistribuirse dichos recursos. Así los autores argumentan que este ambiente es más propenso a generar conflictos civiles, motivados por la lucha distributiva de los recursos concentrados. Por otro lado, la pobreza y la falta de oportunidades laborales presentan un contexto idóneo para el reclutamiento de jóvenes para los grupos al margen de la ley. La explicación de estos autores sugiere que hay un componente de la desigualdad que incita el surgimiento de la violencia. Tomando esto en cuenta en conjunto con el análisis de esta investigación, sugiere que puede haber una dinámica de retroalimentación negativa entre la violencia y la desigualdad, y una determinación simultánea de las variables, generando problemas de endogeneidad en la regresión por efectos fijos.

Una manera plausible de solucionar este problema es la técnica de estimación por variables instrumentales. El fin último de esta metodología es filtrar un componente del conflicto que no es causado por desigualdad de ingresos de la región, y que impacta a la distribución sólo a través del canal de la violencia. En

este caso específico se utiliza como instrumento el número de personas secuestradas liberadas por grupos armados. Para poder utilizar esta variable como instrumento, se deben cumplir dos condiciones. En primer lugar, la cantidad de secuestrados liberados deben estar altamente relacionados con el conflicto contemporáneo. Como se puede ver en la regresión por 2SLS, hay una relación significativa entre los eventos violentos relacionados por el conflicto y el número de secuestrados que han sido liberados, puesto que la primera etapa de la regresión presenta un estadístico F de 22.82 y un aumento en la liberación de un secuestrado está correlacionado con un aumento en .947 de eventos violentos en promedio, a un nivel de significatividad del 1%. Esta relación estadística es consistente con el nexo empírico, puesto que los grupos subversivos utilizan la liberación de rehenes como herramienta de canje de combatientes ilegales capturados por el Estado. De esta manera, es de esperar que la liberación de secuestrados esté correlacionada con un aumento en el número de ataques de grupos armados.

Esto conlleva a la segunda condición para la utilización de esta variable como instrumento. La segunda condición que se debe cumplir para que sea una estimación adecuada es que esta variable no deben afectar el nivel de desigualdad de ingresos de manera directa, sino sólo a partir del efecto que genera sobre la violencia. Esta condición se conoce como condición de exclusión. Es difícil argumentar que la liberación de secuestrados sea generado por características distributivas del departamento, ya que los secuestrados son frecuentemente movilizadas por los grupos subversivos a través del territorio, y usualmente la entrega de rehenes se planea tácticamente por estos grupos para lograr la menor exposición ante el Gobierno Nacional. En este sentido, es implausible que la ubicación o cantidad de secuestrados liberados sea generado por la desigualdad de la región. Paralelamente, debido a la persistencia estructural de la desigualdad, así como las características del secuestro mencionadas, es inverosímil que la liberación de secuestrados pueda tener algún impacto directo sobre el nivel de desigualdad de un departamento. Además, como la estrategia empírica permite controlar por efectos constantes de cada departamento, como las características geográficas u otros factores idiosincráticos, es esperable que se cumpla el supuesto de exclusión. A continuación se muestran los resultados de una regresión

preliminar por mínimos cuadrados en dos etapas, utilizando la liberación de secuestrados como instrumento de los eventos violentos relevantes al conflicto. Los resultados sugieren que la porción exógena de los eventos violentos, genera un aumento en el Índice GINI de 0.0262 puntos en promedio, a un nivel de significatividad de 5%. Esto sugiere que sí existe un nexo causal econométrico consistente con el análisis cualitativo que se llevó a cabo a lo largo de esta investigación.

Estimación 2SLS VARIABLES	(1era Etapa) Eventos	(2da Etapa) Índice GINI
Liberación de Secuestrados	0.947*** (0.198)	
Eventos Estimados		0.0262** (0.0120)
Constante	56.35*** (3.116)	49.67*** (0.837)
Observaciones	561	442
R-cuadrado	0.1041	0.011
Estadístico F	22.82	4.72
Número departamentos	33	33

Errores Estándar en Paréntesis

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

No obstante, esta es sólo una regresión preliminar, debido a que es probable que se pueda complementar el método de estimación con otras variables de control que disminuyan la varianza del estimador, y otros ejercicios empírico que examinen distintos indicadores de violencia. Además, se debe tomar en cuenta que el estimador de variables instrumentales puede generar sesgos bajo una muestra finita. De esta manera, el aporte principal de esta estimación es la introducción de la Liberación de Secuestrados como un instrumento válido para futuras investigaciones acerca del impacto que genera el conflicto armado sobre la desigualdad en la distribución de ingresos.

Conclusión

La implicancia panorámica de este trabajo es que el conflicto armado sí es un factor relevante para explicar el alto nivel de desigualdad colombiana, así como la ausencia de decrecimiento en su tendencia como sí se presencia en los otros casos latinoamericanos durante la primera década del milenio. Es plausible que la tendencia constante del Índice GINI durante los últimos quince años se deba a la mixtura entre el efecto beneficioso generado por los altos gastos sociales ejecutados por el gobierno en periodos recientes, y el efecto negativo que genera la violencia. Aunque estudiar si efectivamente estos dos efectos se cancelan, y generan un efecto neto nulo sobre la distribución de ingresos se sale del marco abarcado en este análisis, es una hipótesis plausible para explicar la persistencia y poca varianza de la desigualdad en Colombia. Este tema puede ser interesante para futuras líneas de investigación.

Los hallazgos principales de este trabajo consisten en las implicancias conjuntas entre los mecanismos de transmisión cualitativos asociados al rol distributivo de la violencia, y los resultados empíricos resultantes de un análisis econométrico. Los resultados del análisis cualitativo se puede subdividir principalmente en tres procesos disímiles pero interrelacionados: la salida de firmas rurales del mercado, el aumento de la brecha educativa, y el papel del desplazamiento y otros cambios rurales en explicar variaciones en el mercado laboral.

Inicialmente, la salida de firmas del mercado en zonas de conflicto o su desplazamiento hacia lugares más seguros, presenta dos consecuencias distributivas. En primer lugar, debido al riesgo asociado a invertir en estas empresas, se genera una concentración de capitales en sectores urbanos reducidos, aumentando los ingresos de un grupo reducido de individuos. Además, las empresas localizadas en zonas rurales se especializan en actividades trabajo intensivas como la agricultura o textiles. Al salir estas empresas del mercado, afectan en mayor proporción a los trabajadores no calificados, que a inversiones en capital físico.

En segundo lugar, las características particulares de la estructura de retornos a la educación junto con efectos que tiene la violencia sobre la educación aumenta la brecha educativa, y consecuentemente la desigualdad en el retorno esperado por años de educación. En términos generales, la violencia dificulta el acceso a la educación de los jóvenes y aumenta la deserción escolar. Esto genera una mayor porción de la población con escasos años de educación. Este hecho sumado a la fuerte convexidad de los retornos a la educación que presenta el caso colombiano, tiene implicancias negativas sobre la distribución de ingresos.

En tercer lugar, la violencia generada por el enfrentamiento de grupos armados impacta directamente al mercado laboral urbano y rural. Con el desplazamiento forzado que genera la violencia, se da una migración hacia áreas urbanas de personas capacitadas en oficios rurales, y por ende generan un aumento en la oferta del trabajo no calificado en las ciudades. Así, se genera una disminución del salario real de trabajadores no calificados y debido a rigideces salariales, un aumento en el desempleo urbano. Sobre el mercado laboral rural, la violencia también aumenta la brecha de ingresos, ya que los grupos armados destruyen infraestructura y generan incentivos para que los pequeños agricultores se desplacen hacia una trayectoria de menores ingresos. Además, la concentración de riqueza rural genera por el narcotráfico, aumenta la compra de tierras por parte de narcotraficantes, traduciéndose en mayores ingresos provenientes del uso productivo de la tierra. La composición de estos mecanismos sugieren que el conflicto armado forja claras repercusiones negativas sobre la distribución de ingresos.

Los resultados del estudio empírico exponen evidencia consistente con el efecto peyorativo que genera el conflicto sobre la desigualdad, así como resaltan particularidades sobre cuáles indicadores del conflicto armado tienen mayor relevancia explicativa sobre esta cuestión. Así, aunque la evidencia muestra que efectivamente los eventos violentos con presencia de guerrilla, paramilitares o el Estado Nacional generen aumentos sobre el Índice GINI, es un hallazgo previamente inadvertido encontrar que los eventos violentos con presencia estatal explican mayores aumentos de desigualdad que aquellos en los que participan grupos guerrilleros o paramilitares. Por otra parte, la evidencia empírica que presentan los términos de interacción surgen que los eventos violentos entre guerrillas y Estado, así como entre guerrillas y paramilitares son un componente importante

para entender la dinámica del aumento y persistencia de la desigualdad. No obstante, lo que más llama la atención es que el efecto marginal relacionado con la interacción de la guerrilla y el Estado sea mucho mayor que aquellos comentados previamente. Esto sugiere que entre los indicadores del conflicto armado que aumentan la desigualdad de ingresos, los eventos con presencia de guerrillas en conjunto con el Estado Nacional son un factor importante y preponderante para entender esta relación.

Además, considerando la posible determinación simultánea de violencia y desigualdad, la estimación por variables instrumentales provee evidencia preliminar sobre un efectivo impacto de la violencia sobre la desigualdad para el caso colombiano. No obstante, los resultados de este análisis presentan más que todo un preámbulo para futuros trabajos acerca de este nexo causal. Así, la evaluación de la liberación de secuestrados como un instrumento válido, puede ser una herramienta útil para una profundización en esta línea de investigación.

Bajo este marco, se torna relevante analizar el efecto conjunto de todas las observaciones sobre mecanismos de transmisión y los hallazgos empíricos, para aportar algunas consideraciones sobre las implicancias distributivas en el contexto actual del Proceso de Negociación entre el Gobierno y las FARC que se está llevando a cabo en La Habana contemporáneamente al momento de elaboración de este estudio. En primer lugar, los efectos generados por la salida del mercado de firmas y el desplazamiento sobre el mercado laboral destaca la relevancia del tercer punto en la agenda de negociaciones, que enfatiza la importancia de la restitución de tierras y reparación de las víctimas del conflicto. Una gran porción de dichas víctimas son las poblaciones que migraron a las ciudades por la falta de oportunidades laborales en empresas rurales o debido al desplazamiento forzado, y ampliamente perjudicadas por las dinámicas del mercado laboral urbano estudiadas en esta investigación. Por otra parte, la brecha de ingresos generada por disparidades de los ingresos de los pequeños agricultores que permanecen en zonas de conflicto, y aquellos generados por el uso productivo de amplias tierras compradas por narcotraficantes, implican que la efectiva negociación del primer punto de la agenda de negociación, puede generar efectos distributivos favorables para las trayectorias de ingresos rurales. Este punto busca una política de desarrollo agrario integral, en el que se pretende reformar las pautas sobre la compra y venta de tierra, así como políticas favorables a

los pequeños agropecuarios.

Por último, los resultados empíricos sobre las repercusiones negativas de la violencia sobre la desigualdad, pueden interpretarse como el costo de oportunidad de suspender los diálogos de paz, y retornar a la situación de un conflicto sin horizonte de conclusión. La evidencia empírica que presentan los términos de interacción estudiados, surgieron que los eventos violentos con presencia de guerrillas y Estado, así como entre guerrillas y paramilitares son un componente importante para entender la dinámica del aumento y persistencia de la desigualdad. No obstante, lo que más llama la atención es que el efecto marginal relacionado con la interacción de la guerrilla y el Estado sea mucho mayor que los otros efectos marginales comentados previamente. Esto sugiere que entre los indicadores del conflicto armado que aumentan la desigualdad de ingresos, los eventos con presencia de guerrillas en conjunto con el Estado Nacional son un factor importante y preponderante para entender esta relación. De esta manera, el quinto punto de la agenda de negociación posee un carácter primordial para la trayectoria futura de la distribución de ingresos en Colombia. Este punto fija las pautas de entrega de armas por las FARC, así como el cese al fuego bilateral entre este grupo y el Estado. Aunque como se explicó previamente, este tema genera polémica en la opinión pública frente a la naturaleza de las sanciones que recibirán los militantes guerrilleros, se considera un aporte relevante el hecho de que el costo de oportunidad frente al cese al fuego de estos dos grupos, es un aumento del índice GINI en .215 por cada evento violento en el que participen estos dos grupos. Esta implicancia es especialmente relevante en la ponderación sobre los costos políticos y sociales de la suspensión de las negociaciones.

Indicadores del Conflicto Armado en Colombia

<u>Muertes totales</u>	Suma de las muertes totales de personas en eventos de conflicto civiles y combatientes.
<u>Muertes civiles</u>	Suma de las muertes totales de personas identificadas como civiles o no combatientes.
<u>Muertes guerrilleras</u>	Suma de las muertes totales de personas identificadas como combatientes de grupos guerrilleros.
<u>Muertes paramilitares/neoparamilitares</u>	Suma de las muertes totales de personas identificadas como combatientes de grupos paramilitares / neoparamilitares (desde agosto de 2006).
<u>Muertes fuerzas estatales</u>	Suma de las muertes totales de personas identificadas como combatientes de las fuerzas estatales.
<u>Indicador de presencia violenta</u>	Si para un municipio en un año determinado existe registro de eventos violentos de un grupo de conflicto, se dice entonces que hay presencia violenta de ese grupo. Toma valor de (1) si hay registro de presencia violenta, (0) si no se registra presencia violenta pero si pero sí hay información para el municipio y N.I. si no hay registro de información para ese municipio.
<u>Indicador de disputa</u>	Si para un municipio en un año determinado existe registro que dos grupos de conflicto sostienen combate o si bien existe registro de acciones unilaterales de ambos grupos, se dice entonces que hay disputa entre estos. Toma valor de (1) si hay registro de disputa , (0) si no se registra disputa pero sí hay información para el municipio y N.I. si no hay registro de información para ese municipio.
<u>Balance de disputa</u>	Este indicador mide, para cada día de disputa, el estado o curso de dicha disputa, identificando los esfuerzos ofensivos de cada grupo. El indicador toma valores entre cero (0) y uno (1): si el valor del balance de disputa es cercano a uno (1), esto implica que los esfuerzos individuales (acciones unilaterales) de A son mayores que los de B, por lo que el balance de disputa estaría a favor del grupo A. Cuando el valor del balance se aproxima a cero (0), se entiende que los esfuerzos individuales de B son mayores que los de A, por lo que el balance favorece a B.
<u>Índice de conflicto armado (ICO)</u>	Este se calcula basado en las muertes y heridos civiles en conflicto y las acciones unilaterales.

Bibliografía

Acemoglu, D. Robinson, J. *Why Nations Fail*. New York: Crown, 2012.

Acemoglu, D., M. A. Bautista, P. Querubin, y J.A. Robinson. «Economic and Political Inequality in Development: The case of Cundinamarca, Colombia.» *National Bureau of Economic Research*, 2007.

Acemoglu, D., S. Johnson, y J. Robinson. «The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation.» *The American Economic Review* Vol.91, n° No.5 (2001): 1369-1401.

Acemoglu, Daron, Simon Johnson, y James Robinson. «"The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation".» *American Economic Review*, 2001: 1369-1401.

ACNUR. «Los límites de la Guerra: Conflicto Armado, Derechos Humanos y Desplazamiento Forzado en el Sur Oriente Colombiano.» *DHES: Consultoría para los Derechos Humanos y Desplazamiento*, 2008.

Angrist, J, y A. Kruger. «Rural Rainfall or a New Resource Curse? Coca, Income and Civil Conflict in Colombia.» *Review of Economics and Statistics*, 2008: 191-215.

Arias, M. A., y A. M. Ibañez. «Conflicto Armado en Colombia y Producción Agrícola.» En *Costos Económicos y Sociales del Conflicto en Colombia*, de M.A. Arias, A. Camacho, A.M. Ibañez, D. Mejía y C. Rodríguez, 61-93. Bogotá: Universidad de los Andes, 2014.

Arias, Maria Alejandra, Adriana Camacho, Ana María Ibañez, Daniel Mejía, y Catherine Rodríguez. «Características del Conflicto Armado y su Impacto Sobre la Salida de Firmas.» En *Costos Económicos y Sociales del Conflicto en Colombia*, de Maria Alejandra Arias, Adriana Camacho, Ana María Ibañez, Daniel Mejía y Catherine Rodríguez, 21. Bogotá: Universidad de los Andes, 2014.

Atkinson, A., y F. Bourguignon. *Handbook of Redistribution*. Oxford: Oxford University Press, 2000.

Azejman, N., S. Galiani, y E. Seira. «On the Distributive Costs of Drug-Related Homocides.» *CEDLAS*, 2014.

Azevedo, J, V Inchauste, y Sanfelice. «Growth without reductions in inequality: Colombia Equity Assesment.» *World Bank Group*, 2012.

Bonilla, L. «Diferencias Regionales en la distribución e ingresos en Colombia.» En *Dimensión Regional de la Desigualdad en Colombia*, de L. Bonilla, 33-65. Bogotá D.C.: Banco de la República, 2011.

Bourguignon, F, F Ferreira, y N. Lustig. *The Microeconomics of Income Distribution Dynamics in East Asia and Latin America*. Washington: The World Bank Group, 2005.

Bourguignon, F. «The Poverty-Growth-Inequality Triangle.» *Paper presenten at the "Indian Council for Research on International Economic Relations*. World Bank, 2004.

Brican, C., T. Bruck, y M. Vothknecht. «Violent Conflict and Inequality.» *University of Manchester Brooks World Poverty Institute*, 2010.

Camacho, A, C Rodríguez, y R.A. Zárate. «Características del Conflicto Armado y sus Efectos Sobre la Salud de Firmas.» En *Costos Económicos y Sociales del Conflicto en Colombia*, de M.A. Arias, A. Ibañez, A.M. Camacho, D. Mejía y C. Rodríguez, 35-61. Bogotá: Universidad de los Andes, 2014.

Cord, L., O. Barriga Cabanillas, L. Luchetti, y C. Rodríguez-Castelán. *Inequality Stagnation in Latin America in the Aftermath of the Global Financial Crisis*. Washington: World Bank Group, 2014.

Cord, Louise, Oscar Cabanillas, Leonardo Lucchetti, y Rodríguez Castelán. «Inequality Stagnation in Latin America in the Aftermath of the Global Financial Crisis.» *World Bank Group*, 2014: 1-40.

Cotte, A. «Growth, Inequality and Poverty: An Análisis of the Violence in Colombia.» *DNP*, 2007.

Di Tella, R., S. Galiani, y E. Sharckrovsky. «Crime Distribution and Victim Behavior during a Crime Wave.» *National Bureau of Economic Research*, 2010.

DNP. *Pobreza Monetaria y Desigualdad de Ingresos, Análisis de Resultados Recientes 2010-2012*. Bogotá: Dirección de Desarrollo Social, 2013.

Galvis, L, y A. Meisel. «Persistencia de las desigualdades regionales en Colombia: Un análisis espacial.» *Serie de Documentos de Trabajo sobre Economía Regional No. 120*, 2010.

- Gasparini, L, y N. Lustig. «The Rise and Fall of Income Inequality in Latin America.» *Society for study of Economic Inequality Working Papers*, 2011.
- Gasparini, L. Cicowiez, M., y W. Sosa Escudero. *Pobreza y Desigualdad en América Latina*. La Plata: CEDLAS, 2013.
- Goñi, E, y J: Serven, L. Lopez. «Fiscal Distribution and Inequality in Latin America.» *World Development*, 2011: 1558-1569.
- Granda, C, y F. Hamann. «Informality, Savings and Wealth Inequality in Colombia.» *BID*, 2015.
- Gómez Guzmán, Iván Darío. *Atlas de la Distribución de la Propiedad Rural en Colombia*. Bogotá: Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2012.
- Guzman, G, y Fals-Borda O. «La Violencia en Colombia. Estudio de un Proceso Social.» *Ediciones Tercer Mundo*, 1963.
- Juniguito, R., y H. Rincon. «La Política Fiscal en el siglo XX en Colombia.» En *Economía Colombiana del Siglo XX*, de J. Robinson y M. Urrutia, 239-312. Bogotá: Banco de la República, 2007.
- Kuznets, Simon. «Economic Growth and Income Inequality.» *American Economic Review*, 1955: 1-28.
- Li, Zou. «Income Inequality Is Not Harmful For Growth: Theory and Evidence.» *Development Economics*, 1998: 318-334.
- Lindert, K., E. Skoufias, y J. Shapiro. «Redistributing Income to the Poor and the Rich: Public Transfers in Latin America and the Caribbean.» Washington: World Bank Group, 2006.
- Londoño, Juan. *Distribución del ingreso y desarrollo económico: Colombia en el siglo XX*. Bogotá: Tercer Mundo editores, 1995.
- Lopez, H, y J. Nuñez. «Pobreza y Desigualdad en Colombia: Diagnóstico y Estrategias.» *DNP*, 2007.
- Mejía, D, y P. Restrepo. «La microeconomía de la producción del tráfico de cocaína en Colombia.» *Políticas Antidrogas en Colombia: Éxitos, Fracasos y Extravíos*, 2011.
- Milanovic, B. «Global inequality recalculated: the effect of the new 2005 PPP estimates on global inequality.» *MPRA Paper, University Library of Munich*, 2009.
- Ministerio de Hacienda y Crédito Público. *Presupuesto General de la Nación 2014*. Bogotá: Presidencia de la Nación, 2014.

Moller, Lars Christian. «Fiscal Policy In Colombia: Tapping Its Potential for a more Equitable Society.» *The World Bank*, 2012: 1-34.

Pataquiva, G. N. «Las FARC: su origen y evolución.» *UNISCI Discussion Papers* (Universidad Complutense de Madrid), 2009.

Persson, T, y G. Tabellini. «Is Inequality Harmful for Growth? Theory and Evidence.» *National Bureau of Economic Research* (Working Paper 3599), 1991.

Rawlings, L. B., y G. M. Rubio. *Evaluating the Impact of Conditional Cash Transfer Programs*. Oxford: Oxford University Press, 2005.

Rawlings, Laura, y Gloria Rubio. «Evaluating the Impact of Conditional Cash Transfer Programs: Lessons From Latin America.» *The World Bank Research Observer*, 2005.

Rodríguez, C., F. Sánchez Torres, y J. Márquez Zuñiga. *Impacto de la Violencia sobre la deserción estudiantil, el logro escolar y el ingreso a educación superior*. Bogotá: Universidad de los Andes, 2012.

Rubio, Mauricio. *Los costos de la violencia en Colombia*. Editado por Universidad de los Andes. Bogotá: Programa de Estudios sobre Seguridad, Justicia y Violencia, 1997.

Sarmiento Gómez, A., L. Perla Tovar, y C. Alam. *Situación de la Educación Básica, Media y Superior en Colombia*. Bogotá: Casa Editorial El Tiempo, 2001.

Sen, A. *Desarrollo y Libertad*. Barcelona: Editorial Planeta, 1999.

Vanegas Barrero, Viviana. *Exposición prenatal a la violencia y deserción escolar en el largo plazo en Colombia*. Bogotá: Universidad de los Andes. CEDE., 2012.

Velez, C. E., J Leibovich, A Kungler, C. Bouillón, y J Nuñez. «The Reversal of Inequality Trends in Colombia: 1978-1995.» En *The Microeconomics of Income Distribution Dynamics in East Asia and Latin America*, de F Bourguignon, F Ferreira y N. Lustig, 125-175. Washington: World Bank Group, 2005.

Villa, E., y J.: Moscoso, M. Restrepo. «Crecimiento Económico, Conflicto Armado y Crimen Organizado, Evidencia para Colombia.» En *Costos Económicos y Sociales del Conflicto en Colombia*, de M.A. Arias, A. Camacho, A. M. Mejía, D. Ibañez y C. Rodríguez, 181-221. Bogotá: Universidad de los Andes, 2014.

Wade, Robert. «Does Inequality Matter?» *Challenge*, 2005: 12-38.

World Bank, Group. *World Bank Database*. 2015.

<http://datos.bancomundial.org/indicador/MS.MIL.XPND.ZS/countries>.



Universidad de
San Andrés